Diálogos en DH 37



FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

Ana Teresa Mejía Hernández

Coordinadora

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
DEL ESTADO DE MÉXICO

MYRNA ARACELI GARCÍA MORÓN
Presidenta

ANA TERESA MEJÍA HERNÁNDEZ
Encargada del despacho de la Director General del Instituto de Investigaciones y Formación en Derechos Humanos

TANIA CAROLINA JIMÉNEZ MANZANILLO
Jefa del Departamento de Investigaciones y Publicaciones

■

DIÁLOGOS EN DH
Erick Zavala Gallardo
DIRECTOR

Diálogos en DH 37

FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

Ana Teresa Mejía Hernández
Coordinadora

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO

Formación en derechos humanos

D. R. © Ana Teresa Mejía Hernández

Primera edición, agosto de 2025

D. R. 2025, Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
Av. Nicolás San Juan, núm. 113, col. Ex Rancho Cuauhtémoc,
C. P. 50010, Toluca, México. Tel. (800) 999 4000
http://www.codhem.org.mx

Editor responsable: Bernardo Jorge Almaraz Calderón
Coordinación editorial: Departamento de Investigaciones y Publicaciones
Edición al cuidado de: Ricardo Hernández Montes de Oca
Imagen de portada: Freepick

ISBN: 978-607-5891-75-0
e-ISBN: 978-607-5891-76-7

Libro arbitrado

Impreso y hecho en México.
Queda prohibida la reproducción total o parcial
de la publicación sin previa autorización
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

Contenido

9 Presentación
Myrna Araceli García Morón

17 Análisis de la desaparición de personas en el Estado de México, de enero de 2019 a diciembre de 2024
Patricia García Cabello

31 Análisis jurídico sobre la afectación al derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales derivado de la desaparición del INAI
Ricardo García Romero

41 Cuidar es un trabajo de todas y todos
Yara Mariela González Victoria

51 Comunicación eficaz: el gran desafío en la agenda pública de los derechos humanos
Mauricio Miguel Hernández Caballero

61 Análisis normativo en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, y las obligaciones del Estado mexicano
Yasmin Iglesias García

71 La inclusión de las personas con discapacidad física, auditiva y visual en la educación básica en el Estado de México
Ana Teresa Mejía Hernández

87 La gobernanza territorial y los procesos electorales: un análisis desde las autoridades auxiliares de los ayuntamientos del Estado de México
Anayeli Padilla Montes de Oca

99 Importancia de la perspectiva de género en la investigación de violaciones a los derechos humanos por los organismos públicos de derechos humanos
Jessica Terán Aguilar

PRESENTACIÓN

Este número de la colección Diálogos en DH se refiere a la formación en derechos humanos con que deben contar todas las personas servidoras públicas, ya que tanto el artículo 1º de la Constitución, como el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, señalan que es obligación de toda autoridad, promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Asimismo, señala el mismo artículo 1º, que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos de las personas.

Es importante este número ya que los "Lineamientos para la emisión del Código de Ética a que se refiere el artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas", de observancia obligatoria para todas las personas servidoras públicas del país, disponen que:

> Las personas servidoras públicas respetan los derechos humanos, y en el ámbito de sus competencia y atribuciones, los garantizan, promueven y protegen de conformidad con los Principios de: *Universalidad* que establece que los derechos humanos corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo; de *Interdependencia* que implica que los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí; de *Indivisibilidad* que refiere que los derechos humanos conforman una totalidad de tal forma que son complementarios e inseparables, y de *Progresividad* que prevé que los derechos humanos están en constante evolución y bajo ninguna circunstancia se justifica un retroceso en su protección.

Es decir, que toda persona servidora pública debe ser profesionalizada en materia de derechos humanos, debe ser competente, esto es, que debe tener "Pericia, aptitud o idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto determinado".[1]

Toda persona que desee ingresar al servicio público, independientemente del poder u órgano del Estado al que pretenda servir, debe contar con los conocimientos necesarios en materia de derechos humanos acordes al área o actividad a la que quiera ingresar, ya que es una condición que señala la Constitución.

En ese sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, destacó, que

[1] Véase https://dle.rae.es/competencia#MdkgPwU

El derecho a la educación es un derecho social y colectivo el cual se entiende como una prerrogativa que tiene todo ser humano a recibir la *formación*, la instrucción, dirección o enseñanza necesarias para el desarrollo armónico de todas sus capacidades cognoscitivas, intelectuales, físicas y humanas; se trata de un elemento principal en la formación de la personalidad de cada individuo, como parte integrante y elemental de la sociedad. Dicha prerrogativa está contenida en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 13.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el 13.1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el artículo 26.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; y XII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. De estos ordenamientos se desprende que la efectividad de este derecho se obtiene mediante el cumplimiento de una diversidad de obligaciones que están a cargo de una multiplicidad de sujetos, tales como la capacitación de las personas para participar en una sociedad libre, que debe impartirse por las instituciones o el Estado de forma gratuita y ajena a toda discriminación, en cumplimiento a las características de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. Todas estas obligaciones estructuradas de manera armónica, a partir de las obligaciones generales de promoción, protección, respeto y garantía que establece el artículo 1o. de la Constitución.[2]

[2] Tesis aislada 1a. CLXVIII/2015 (10a.), Primera Sala, *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I, p. 425.

A su vez, las personas servidoras públicas que ya laboran para el Estado deben recibir capacitación constante en materia de derechos humanos, ya que los derechos humanos son dinámicos, prerrogativas vivas que van ampliándose y enriqueciéndose constantemente, por lo que las personas servidoras públicas deben estar siempre actualizadas.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre Educación y Formación en Materia de Derechos Humanos, señala en el artículo 2, que

> 1. La educación y la formación en materia de derechos humanos están integradas por el conjunto de actividades educativas y de formación, información, sensibilización y aprendizaje que tienen por objeto promover el respeto universal y efectivo de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, contribuyendo así, entre otras cosas, a la prevención de los abusos y violaciones de los derechos humanos al proporcionar a las personas conocimientos, capacidades y comprensión y desarrollar sus actitudes y comportamientos para que puedan contribuir a la creación y promoción de una cultura universal de derechos humanos.
>
> 2. La educación y la formación en materia de derechos humanos engloban:
>
> a) La educación sobre los derechos humanos, que incluye facilitar el conocimiento y la comprensión de las normas y principios de derechos humanos, los valores que los sostienen y los mecanismos que los protegen;
>
> b) La educación por medio de los derechos humanos, que incluye aprender y enseñar respetando los derechos de los educadores y los educandos;

c) La educación para los derechos humanos, que incluye facultar a las personas para que disfruten de sus derechos y los ejerzan, y respeten y defiendan los de los demás.

Los derechos humanos son el estándar que debe guiar el correcto actuar de toda persona servidora pública. La base, desde luego, es la legalidad, ya que esta última garantiza la aplicación de los propios derechos humanos. Es un binomio inescindible que permite el andamiaje perfecto para la tutela de la dignidad humana.

La CODHEM se congratula por la publicación de este importante volúmen, el cual está integrado por ocho capítulos, en los que escriben personas egresadas de los posgrados que imparte esta Casa de la Dignidad y las Libertades, por lo tanto visibiliza perspectivas y trabajos de investigación con relación a la formación en derechos humanos y emergentes.

Mtra. en D. Myrna Araceli García Morón
Presidenta de la CODHEM

37

FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

Ana Teresa Mejía Hernández
Coordinadora

Análisis de la desaparición de personas en el Estado de México, de enero de 2019 a diciembre de 2024

Patricia García Cabello*

"Estado de México:
tierra de ausencias, voces que resisten"

Este artículo analiza la problemática de las desapariciones en el contexto de los conflictos entre la sociedad civil y el Estado. Examina cómo esta tensión ha impulsado ciertos avances institucionales. Sin embargo, dichos esfuerzos aún resultan insuficientes. Se plantea la necesidad de una respuesta más efectiva y articulada frente a esta crisis.

* Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México, especialista en Derechos Humanos y maestrante en Derechos Humanos y Emergentes por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Titular de la Unidad Técnica en la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México.

Asimismo, aborda aquellos avances institucionales que han surgido en materia de búsqueda de personas a raíz del conflicto que se suscita entre dos partes: por un lado, las víctimas, familiares, sociedad civil y miembros de colectivos en busca de personas desaparecidas; por otro, el Estado y sus instituciones. El objetivo es investigar cómo la sociedad civil, los colectivos de víctimas y las personas activistas han reaccionado ante la crisis de desaparición, se destacan las protestas, las demandas de justicia y los principales enfrentamientos contra el Estado, lo que ha ocasionado diversos conflictos, pero también avances significativos.

Según familiares de personas desaparecidas, la desaparición es peor destino que la muerte. Cuando fallece un ser querido, el dolor es inmenso, pero la certeza de saber qué le sucedió y dónde se encuentra permite comenzar con un proceso de duelo que, conforme pasa el tiempo, genera aceptación o resignación por lo sucedido. Por lo tanto, poco a poco las personas comienzan a reconstruir su proyecto de vida. En la desaparición forzada ocurre lo contrario, el paso del tiempo se vuelve el más cruel enemigo. Conforme transcurren los días la incertidumbre y el miedo a que le haya ocurrido algo malo a su ser querido no disminuyen, más bien se incrementan.[1]

El delito de la desaparición de personas ha estado presente en nuestro país desde hace mucho tiempo, es un constante recordatorio de nuestro Estado fallido y opresor. Aunque han sido varias las acciones que se han intentado emprender para combatir esta grave problemática,

[1] Garnica, 2022.

no fue sino hasta finales de 2017 cuando hubo un gran avance respecto de su combate, a través de la publicación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; esta normativa comenzó a sentar las bases para que cada entidad federativa legislara al respecto y se trabajara en todo el país. Sin embargo, la ley no nació como una iniciativa del Estado mexicano, sino que fue fruto de la lucha de familiares de personas desaparecidas, los colectivos que han formado y las organizaciones de la sociedad civil que los han respaldado en la búsqueda de sus seres queridos.

La desaparición de personas es una grave violación a los derechos humanos, pero sobre todo es un delito, que afecta tanto a las personas desaparecidas como a aquellas que las buscan o que acompañan en las búsquedas. Son muchos y variados los derechos que se ven afectados, sería difícil nombrarlos todos, por lo pluriofensivo que resulta ser; sin embargo, en el presente trabajo se abordan las violaciones a los derechos de la vida, la justicia y la verdad.

La principal hipótesis es que la movilización social, a través de colectivos de víctimas y organizaciones de derechos humanos, ha tenido un impacto limitado pero significativo en la visibilidad del problema y en las demandas de justicia, aunque las respuestas institucionales siguen siendo insuficientes.

Dentro de la revisión literaria que se ha escrito de este tema tenemos una gran bibliografía al respecto, ya que se ha abordado desde diversas aristas, existen estudios de derechos humanos y justicia transicional, como se vislumbra en la obra coordinada por Javier Yankelevich,

intitulada *Desde y frente al Estado: pensar, atender y resistir la desaparición de personas en México*, donde se han analizado las desapariciones en México desde la perspectiva de los derechos humanos, señalando la responsabilidad del Estado mexicano en la perpetración y la falta de respuestas efectivas a las víctimas, los mismos incluyen análisis de la legislación internacional, como la Convención contra la Desaparición Forzada de la ONU, y la falta de cumplimiento por parte del Estado mexicano. Por otra parte, algunos estudios se han centrado en la propuesta de mecanismos de justicia transicional, como las comisiones de la verdad y los tribunales internacionales; también se han explorado los procesos de reparación integral a las víctimas, basándose en experiencias internacionales.

También existen trabajos en los que personas sociólogas y criminólogas han abordado las desapariciones desde la perspectiva de las dinámicas sociales, el crimen organizado y la militarización de la seguridad pública en México, como el del sociólogo uruguayo Gabriel Gatti, *El detenido desaparecido: Narrativas posibles para una catástrofe de la identidad*, donde explora cómo se narra y se entiende la figura de la persona desaparecida en América Latina, enfocándose en las consecuencias identitarias y sociales de la desaparición. Igualmente, tenemos los de la doctora Martha Patricia Castañeda Salgado, quien, desde una visión criminológica y antropológica, analiza desapariciones de mujeres y feminicidios en el contexto mexicano. Otros estudios destacados son aquellos que se reflejan por personas historiadoras, quienes han contextualizado la desaparición de personas en México dentro de una tradición histórica de violencia política, donde la lucha por la

memoria histórica también ha sido un tema clave; destacan obras como *Los Trabajos de la Memoria*, de la argentina Elizabeth Jelin, donde estudia cómo la memoria colectiva de las desapariciones, y su construcción en sociedades que han sufrido violencia política, se concilian en disputas en el ámbito público.

Además de los trabajos académicos y periodísticos, también la literatura y el testimonio literario han desempeñado un papel muy importante en la visibilidad del conflicto de las desapariciones. Destacan los testimonios personales que abordan el tema, mismos que dan voz a las víctimas y sensibilizar al público mediante narrativas de víctimas y familiares de personas desaparecidas, en los cuales se describen las historias de lucha, sufrimiento y resistencia; tenemos obras como *Los Buscadores*, coordinada por Germán Canseco y Noé Zavaleta, quienes junto con diversos autores, a lo largo de 351 páginas, plasman 23 historias de vida, resaltando (no minimizando las demás) las primeras búsquedas que realizaron padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Asimismo, y relativo al Estado de México, tenemos la obra *La Fosa de Agua*, de Lydiette Carrión, periodista que documenta las desapariciones de adolescentes en Ecatepec y Los Reyes Tecámac, resaltando la precariedad de las investigaciones realizadas, como en el caso de Araceli, a quien en la Fiscalía mexiquense le dijeron que las pruebas genéticas del cuerpo hallado en las vías del tren no correspondían a su hija desaparecida; sin embargo, después de años de lucha a lado de colectivos, pudo realizar una nueva prueba con laboratorios extranjeros y, una vez obtenidos aquellos, las

autoridades mexicanas no tuvieron más que decirle: "Usted disculpe, sí es su hija".[2]

El conflicto de la desaparición de personas en México ha sido tratado en una amplia gama de producciones literarias y académicas, que abordan la complejidad de la crisis desde perspectivas sociales, culturales, de derecho y memoria. Ese conflicto afecta no solo a las víctimas directas y sus familias, sino también a la sociedad en conjunto, pues la desconfianza hacia las instituciones de seguridad y justicia se incrementa, al igual que la polarización y el desarraigo social.

Ahora bien, dentro del marco teórico jurídico, es relevante señalar que la normatividad en México en materia de desaparición de personas ha experimentado varios avances en los últimos años; sin embargo, la implementación de estas leyes y normas sigue siendo insuficiente y el problema de la desaparición de personas continúa siendo una grave crisis de derechos humanos en el país. Actualmente, para el Estado de México son aplicables, principalmente, las siguientes disposiciones: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Convención Interamericana sobre Desapariciones Forzadas, Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, Ley General de Víctimas y Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares para el Estado Libre y Soberano de México.

Para el análisis de este avance institucional, el cual se materializa con la creación de la Ley General en Materia

[2] Carrión, 2018.

de Desaparición, las leyes locales en la materia implementadas en algunas entidades, la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda; asimismo, de las comisiones locales y los diversos mecanismos para la participación de familias en la búsqueda; por ello, es importante señalar que la corriente teórica que mejor se adapta es la funcionalista. Esto porque en el presente conflicto se observan dos actores, el Estado y la sociedad civil, las cuales emanan y posteriormente, configuran una constante crisis, debido a que no se erradica el principal conflicto, asimilando esta última como la fase terminal. Ahora bien, se encuentran en una constante crisis, cumpliendo una función encaminada a la satisfacción de necesidades, esto desde una aproximación significante, toda vez que se busca hacer memoria y justicia sobre este delito.

La desaparición de personas en México se ha convertido en un conflicto social, político y de derechos humanos debido a la creciente cantidad de víctimas, la impunidad prevalente y la incapacidad o falta de voluntad del Estado para resolverlo adecuadamente. Según la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México, desde el 1 de enero 2005 y hasta el 7 de noviembre de 2024, están pendientes de localizar, solo en el Estado de México, 14,879 personas.

Por otra parte, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas señala que en el periodo de 2019 a 2024 se suscitaron 23,720 desapariciones en el Estado de México, teniendo un 24.34% pendiente por localizar.

Los actores en este conflicto son víctimas directas como las personas desaparecidas y las familias de las per-

sonas desaparecidas; organizaciones de la sociedad civil como colectivos de víctimas y ONG de derechos humanos con presencia en el Estado de México, y actores del Estado, que son sus diversas instituciones como la Fiscalía General de Justicia, la Secretaría de Seguridad, la Comisión de Búsqueda de Personas, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y las células de búsqueda.

Las afectaciones por este conflicto son diversas: por un lado, hacia las víctimas directas de desaparición, quienes llegan a ser privadas de la vida o sometidas a condiciones inhumanas; por otro lado, hacia las familias que viven tanto sufrimiento como incertidumbre constante, toda vez que muchas veces no llegan a conocer la suerte o el paradero de sus seres queridos, y si lo llegan a saber, cuando existe la comisión de un delito, muchas veces queda impune.

No obstante, las afectaciones no se detienen ahí, la sociedad en general sufre actos como violencia e impunidad que generan un clima de inseguridad que afecta la confianza en las instituciones. La desaparición también desencadena procesos de fragmentación social y desconfianza, se debilita el Estado de derecho y la confianza en las instituciones; asimismo, en comunidades donde hay un alto índice de desapariciones, se genera un entorno de temor e inestabilidad que puede afectar las actividades productivas y el desarrollo social.

El conflicto de la desaparición de personas en el Estado de México está en una etapa de crisis persistente, toda vez que diariamente desaparecen personas y las protestas en contra de las instituciones en el Estado de México son constantes. Existen plantones, marchas, quejas, denuncias

públicas, movilizaciones en redes sociales y demandas mediante colectivos. Si bien, a veces parece que hay un estancamiento en las acciones emprendidas por el Estado, lo cierto es que los puntos de agresión o daño son persistentes en crisis.

La desaparición de personas surgió desde las décadas de los setenta y ochenta, en el marco de la represión política (mal llamada Guerra Sucia), donde se comenzó a documentar la desaparición forzada de "opositores políticos"; a partir de 2000, la violencia relacionada con el narcotráfico y la militarización de la seguridad pública aumentaron las desapariciones, y en el periodo de la llamada "guerra contra el narcotráfico", iniciada por el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, la violencia se disparó, lo que resultó en miles de desapariciones forzadas y el colapso de las instituciones encargadas de investigar estos delitos.[3] Derivado de ello, en 2012 iniciaron, en su mayoría, las creaciones de colectivos de víctimas y el tema de la desaparición forzada ganó visibilidad nacional e internacional. La sociedad civil desempeñó un papel crucial, pues a través de protestas expresó sus demandas y tanto las luchas como los conflictos se intensificaron.

Por lo antes descrito, el Estado ha tenido que dar una respuesta; en el periodo de 2019 a 2024, se puede visualizar que su accionar principal se ha centrado en legislar en la materia, ya que se aprobaron la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y la correspondiente en el Estado de

[3] Naciones Unidas, 2022.

México, asimismo, se crearon las comisiones de búsqueda de personas a partir de 2018. Es así que, gracias al impulso de la sociedad civil, los familiares de personas desaparecidas y los colectivos, se han continuado las protestas y marchas, que exigen la constante visibilidad internacional y la justicia, así como el correcto funcionamiento de las instituciones.

La desaparición vulnera profundamente el derecho a la vida al sustraer a las víctimas de la protección legal, por lo que mejorar las capacidades de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México es esencial para garantizar los derechos fundamentales a la vida, la justicia y la verdad. Asignar mayores recursos financieros; incrementar el personal especializado y regionalizarlo; garantizar una capacitación interdisciplinaria y continua; implementar tecnología avanzada para búsqueda e investigación; fortalecer la coordinación interinstitucional entre niveles de gobierno y la sociedad civil; así como humanizar los protocolos, son acciones fundamentales para mejorar la efectividad de las búsquedas.

Esas medidas permitirán agilizar los procesos de localización e identificación, optimizar el uso de herramientas científicas y periciales, así como fortalecer la capacidad de respuesta ante denuncias y hallazgos; asimismo, podrán asegurar la sanción a las personas responsables, garantizando que los delitos no queden impunes, y permitirán la reparación integral a las víctimas y sus familias, quienes tienen derecho a la justicia, así como a conocer la verdad sobre lo sucedido. Para ello es esencial que se refuercen los mecanismos de acompañamiento psicosocial y asistencia jurídica, asegurando que cada etapa del proceso

esté centrada en la dignidad y los derechos de las personas afectadas.

Lo antes señalado no solo responde a las legítimas demandas de colectivos y familiares, sino que también reduce tensiones entre los actores involucrados, fortalece el trabajo coordinado entre las instituciones y contribuye a la construcción de confianza ciudadana. Además, reconstruye el tejido social afectado por la violencia, fomenta una cultura de memoria y prevención y avanza hacia la erradicación de la desaparición como patrón estructural. La implementación de políticas públicas con enfoque de derechos humanos y una mayor rendición de cuentas por parte de las autoridades serán claves para transformar la realidad actual, garantizando que la búsqueda de personas desaparecidas se realice con el compromiso, la urgencia y la sensibilidad que exige la gravedad de la crisis.

La sociedad civil organizada en México ha desempeñado un papel crucial en la visibilidad de las desapariciones y en la presión a las autoridades para cambiar las políticas y prácticas en torno a la desaparición. Sin embargo, esta movilización también se enfrenta a enormes desafíos, como la polarización política y la falta de recursos para enfrentar un Estado que a menudo está en conflicto con estos grupos.

El conflicto entre colectivos de víctimas, la sociedad civil y el Estado mexicano es un reflejo de una crisis de derechos humanos que involucra tanto la incapacidad del Estado para resolver el problema de las desapariciones como la lucha por justicia, verdad y reparación de las víctimas y sus familias. Las dinámicas de este conflicto incluyen la resistencia del Estado, las demandas de justicia de

la sociedad civil, así como las tensiones políticas, sociales y económicas generadas por este fenómeno de violencia estructural. Definitivamente, es un tema que debe seguir analizándose, ya que hay bastantes personas pendientes de atender, muchos derechos pendientes de restituir, varias políticas que implementar y muchas mejoras institucionales que alcanzar.

La información presentada resulta clave al ofrecer una síntesis del desarrollo del conflicto a lo largo de los años mencionados. Como se destacó al inicio, es evidente que la movilización social, impulsada por colectivos de víctimas y organizaciones de derechos humanos, ha tenido un impacto significativo en visibilizar el problema y en las demandas de justicia. Gracias a estos esfuerzos, se han logrado avances importantes, como la creación de leyes e instituciones. Aunque las respuestas institucionales siguen siendo insuficientes, el proceso continúa y tanto las familias y como los colectivos que deciden alzar la voz han ido ganando espacio, consolidando su lucha por la verdad y la justicia.

Es así que, fortalecer a la Comisión de Búsqueda del Estado de México es clave para garantizar los procesos de búsqueda y alcanzar los derechos a la vida, la justicia y la verdad. Medidas como la asignación de recursos, la profesionalización del personal y el uso de tecnología avanzada son fundamentales para hacer más eficaces y humanas las labores de búsqueda e identificación.

La desaparición en México, particularmente en el Estado de México, es un tema que lastima a toda la sociedad. Existe una deuda histórica con todas y cada una de esas personas que no sabemos dónde se encuentran, pero

por las que se sigue luchando. No podemos continuar con una opresión intelectual; sin olvidar que dicha opresión consiste en la restricción o manipulación del pensamiento crítico y la capacidad de razonamiento de un individuo o grupo, a menudo por parte de sistemas de poder o ideologías dominantes. Hay mucho por delante que nos falta hacer en la materia. Hay memoria, memoria que debemos recordar.

Análisis jurídico sobre la afectación al derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales derivado de la desaparición del INAI

Ricardo García Romero*

Introducción

El acceso a la información y la protección de datos personales son derechos esenciales en una democracia. En México el INAI ha sido clave para garantizar su cumplimiento, pero su desaparición ha encendido un debate jurídico y político. Este ensayo analiza las implicaciones legales de dicha medida, así como sus efectos en la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de los derechos ciudadanos.

* Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de México.

El derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales constituyen pilares fundamentales en un Estado democrático de derecho. En México, estos derechos han sido garantizados mediante la existencia de organismos autónomos especializados, siendo el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) el principal encargado de velar por su cumplimiento. Sin embargo, con su desaparición ha generado un intenso debate jurídico y político, ya que su ausencia podría significar un retroceso en la garantía y tutela de estos derechos fundamentales.

El presente ensayo realiza un análisis jurídico sobre las implicaciones de la desaparición del INAI, examinando el marco normativo vigente, los principios constitucionales afectados y los riesgos potenciales que enfrentaría la ciudadanía ante una posible omisión o debilitamiento de los mecanismos de transparencia y protección de datos personales. Asimismo, se aborda el impacto que esta decisión tendría en la rendición de cuentas y la democracia en México.

El marco jurídico del derecho de acceso a la información y protección de datos personales

En México, el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales forman parte de las garantías constitucionales fundamentales. Estos derechos fortalecen la rendición de cuentas del gobierno y resguardan la privacidad de la ciudadanía, siendo el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección

de Datos Personales (INAI), el organismo encargado de su vigilancia y cumplimiento. A través de un marco legal sólido, se promueve la transparencia y se protege la información personal frente a posibles abusos.

El derecho de acceso a la información y la protección de datos personales están consagrados en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Estos derechos permiten a la ciudadanía conocer el actuar del gobierno y proteger su información personal de un uso indebido por parte del Estado o de particulares.

El INAI, como organismo autónomo constitucional, ha sido el encargado de garantizar estos derechos a través de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) y la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPP). Estas leyes establecen los principios y procedimientos para la transparencia gubernamental y la defensa de los datos personales de la ciudadanía.

Desde su creación, el INAI ha jugado un papel fundamental en la resolución de controversias en materia de acceso a la información y protección de datos personales, con lo que se garantiza que las instituciones gubernamentales cumplan con sus obligaciones de transparencia y protejan la privacidad de la ciudadanía.

La propuesta de desaparición del INAI y sus fundamentos

La desaparición del INAI generó un intenso debate en el marco de la política de austeridad del gobierno federal.

Mientras se argumenta que sus funciones podrían ser asumidas por otras dependencias para reducir costos, críticos advierten que esta medida comprometería la autonomía y efectividad en la garantía del derecho a la información y la protección de datos personales.

El debate sobre la desaparición del INAI ha surgido en el contexto de una política de austeridad promovida por el gobierno federal, que argumenta que la existencia de múltiples organismos autónomos genera duplicidad de funciones y altos costos para el erario. Se ha planteado que las funciones del INAI podrían ser absorbidas por otras instancias gubernamentales, como la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Sin embargo, esta propuesta ha sido criticada por diversos sectores, argumentando que la transferencia de facultades a órganos dependientes del Ejecutivo afectaría la imparcialidad y autonomía en la resolución de casos de transparencia y protección de datos. Al eliminar un organismo autónomo especializado, se corre el riesgo de reducir la eficacia de los mecanismos de acceso a la información y debilitar la capacidad de la ciudadanía para exigir rendición de cuentas.

Impacto en el derecho de acceso a la información pública

La desaparición del INAI tendría un impacto negativo en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Al eliminar al organismo encargado de garantizar la transparencia, se corre el riesgo de fortalecer la opacidad guberna-

mental. Esto debilitaría la rendición de cuentas y limitaría la capacidad de la ciudadanía para fiscalizar al poder público.

La desaparición del INAI afectaría directamente el acceso a la información pública, dado que este organismo es el encargado de garantizar que los sujetos obligados (instituciones gubernamentales, partidos políticos, sindicatos, entre otros) cumplan con su deber de transparencia.

Sin un ente autónomo que vigile el cumplimiento de las disposiciones en materia de transparencia, el acceso a la información quedaría a merced de decisiones gubernamentales, lo que podría llevar a un aumento en la opacidad y la discrecionalidad en la entrega de información pública. Esto representaría un grave retroceso en la consolidación democrática del país, ya que sin acceso a información veraz y oportuna, la ciudadanía pierde una herramienta fundamental para la vigilancia del poder público.

Además, en un contexto de creciente corrupción y falta de rendición de cuentas, la desaparición del INAI debilitaría la posibilidad de que personas periodistas, académicas y ciudadanía accedan a información sobre el uso de recursos públicos, decisiones de gobierno y posibles conflictos de interés.

Consecuencias en la protección de datos personales

La desaparición del INAI también tendría serias implicaciones en la protección de datos personales. Al eliminar a un órgano autónomo que garantiza el uso adecuado de la información, aumentaría el riesgo de abusos y vulnera-

ciones a la privacidad. Esto no solo pondría en riesgo a la ciudadanía, sino que podría acarrear consecuencias internacionales para México.

La protección de datos personales también se vería gravemente afectada, ya que el INAI es la única institución con la capacidad y autonomía necesarias para garantizar que las entidades gubernamentales cumplan con los principios de licitud, finalidad y proporcionalidad en el tratamiento de datos personales.

Si las funciones del INAI son absorbidas por una dependencia del Ejecutivo, el riesgo de que los datos personales sean utilizados de manera indebida o con fines políticos aumentaría significativamente. La falta de un órgano independiente que vigile y sancione el uso indebido de datos personales podría traducirse en una mayor vulnerabilidad de la ciudadanía ante filtraciones, robos de identidad y usos indebidos de su información por parte del Estado o empresas privadas.

Además, México podría enfrentar sanciones internacionales por incumplimiento de tratados y estándares en materia de protección de datos, lo que afectaría su posición en acuerdos comerciales y su relación con organismos internacionales de derechos humanos.

Posibles alternativas para el fortalecimiento del sistema de transparencia y protección de datos

Ante el debate sobre la desaparición del INAI, existen alternativas viables para fortalecer el sistema de transparencia y protección de datos sin comprometer su autonomía. Re-

formas administrativas, mayor fiscalización, participación ciudadana y el uso de tecnología pueden mejorar su funcionamiento y eficiencia. Estas opciones buscan preservar los derechos fundamentales de acceso a la información y protección de datos

Se podrían explorar alternativas para fortalecer el sistema de transparencia y protección de datos en México. Algunas posibles soluciones incluyen:

- Reforma para optimizar recursos. Se podría realizar una reforma para mejorar su eficiencia administrativa y reducir costos sin comprometer su autonomía, en lugar de desaparecer el INAI.
- Mayor fiscalización de sujetos obligados. Implementar mecanismos más estrictos para garantizar que todas las entidades gubernamentales cumplan con sus obligaciones en materia de transparencia.
- Fortalecimiento de la participación ciudadana. Crear mecanismos que permitan una mayor participación de la sociedad civil en la supervisión del acceso a la información y la protección de datos personales.
- Uso de tecnología para la transparencia. Promover el uso de plataformas digitales que faciliten el acceso a la información pública y garanticen la protección de datos personales de manera eficiente y accesible.

Conclusiones

La propuesta de desaparecer el INAI plantea serias implicaciones para los derechos fundamentales en México.

Sin un órgano autónomo que garantice la transparencia y proteja los datos personales, se corre el riesgo de retroceder en materia de rendición de cuentas y protección de la privacidad. En lugar de eliminarlo, es fundamental fortalecer su funcionamiento. Además, México podría incumplir compromisos internacionales en derechos humanos, lo que afectaría su reputación global.

La desaparición del INAI representa un grave retroceso en la garantía del derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales en México. Sin un organismo autónomo que supervise el cumplimiento de estas obligaciones, la opacidad en la gestión gubernamental podría aumentar, debilitar la rendición de cuentas y limitar el ejercicio de los derechos de la ciudadanía.

Además, la eliminación de un ente especializado en la protección de datos personales dejaría a la población en una situación de mayor vulnerabilidad frente al uso indebido de su información por parte del Estado y actores privados. En un contexto donde la digitalización de la información avanza rápidamente, la existencia de un órgano garante independiente se vuelve aún más crucial.

El gobierno actual debería enfocarse en fortalecer y mejorar su funcionamiento, garantizando que sus recursos se utilicen de manera eficiente sin comprometer su independencia. Solo a través de una institucionalidad fuerte y autónoma se puede asegurar que los derechos de acceso a la información y protección de datos personales sean efectivamente garantizados en México.

Es importante resaltar que actualmente México está comprometido, mediante tratados internacionales como la Convención Interamericana de los Derechos Humanos

y otros instrumentos de la ONU, a garantizar el acceso a la información y la protección de datos personales. La desaparición del INAI podría ser vista como un incumplimiento de estos compromisos, generando sanciones y presión internacional.

Cuidar es un trabajo de todas y todos

Yara Mariela González Victoria*

Este capítulo presenta un análisis del trabajo de cuidados desde una perspectiva de género y derechos humanos, destaca su relevancia en la vida cotidiana y su impacto en la desigualdad estructural que enfrentan las mujeres. A través de un enfoque académico y normativo, se visibiliza este trabajo como una labor fundamental, frecuentemente no remunerada, y se plantea la necesidad de políticas públicas que garanticen el derecho al cuidado y la equidad en el ámbito laboral en el Estado de México.

A lo largo de la existencia, el ser humano se enfrenta continuamente a diversos retos; desde que nace hasta que muere enfrenta múltiples necesidades, que en algunos casos solo pueden ser atendidas por otras personas, por ejemplo, cuando una persona nace, necesita ser ali-

* Alumna de la Segunda Promoción de Maestría en Derechos Humanos y Emergentes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

mentada y limpiada por alguien más; conforme crece, sus necesidades cambian, necesita ser enseñada, amada y cuidada; posteriormente, cuando llega a la etapa de la vejez, la atención que requiere tiene que ver con la gestión de enfermedades, el control de medicamentos y, en general, la mejora en su calidad de vida. En definitiva, la vida es algo que se desarrolla en grupo, trabajando en equipo y de forma conjunta.

Cuidar es fundamental para garantizar el bienestar físico, emocional y social de las personas; Edna María López Carrión afirma que los cuidados "son todas las actividades que se requieren para sostener y reproducir la vida humana, entendidas como el conjunto de tareas y disposiciones [...] que procuran el bienestar de las personas".[1] Estos cuidados engloban una amplia gama de actividades que van más allá del cuidado físico e incluyen el apoyo emocional, la atención psicológica, la educación, el fomento de relaciones sociales y el mantenimiento de un entorno adecuado y saludable.

Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (2019) define el trabajo como "el conjunto de actividades humanas, remuneradas o no, que producen bienes o servicios en una economía o que satisfacen las necesidades de una comunidad o proveen los medios de sustento necesario para los individuos", lo que lleva a considerar el cuidado como un trabajo que puede ser remunerado o no.

Al abordar el trabajo de cuidados, resulta imprescindible analizar la división sexual del trabajo, dado que ambos conceptos están profundamente interrelacionados en las

[1] López, 2022, p. 8.

dinámicas sociales y económicas. Ya han trascurrido varias décadas desde que las mujeres se insertaron en el mercado del trabajo remunerado, pero ello no significa que haya existido impacto en las dinámicas distributivas de actividades de cuidados.[2]

Las mujeres, además de participar en el mercado laboral remunerado, enfrentan una doble jornada al asumir, cuando regresan a sus hogares, la responsabilidad del trabajo de cuidados. Este incluye el mantenimiento del hogar, la atención a hijas e hijos, el cuidado de personas con enfermedades y de personas adultas mayores. Esta carga desproporcionada contribuye significativamente a la persistencia de una brecha de género, toda vez que los varones no han asumido dichas labores en condiciones de equidad. Esta desigualdad se ve reforzada por la persistente estigmatización del trabajo de cuidados como una tarea exclusiva de las mujeres, lo que reproduce estereotipos de género discriminatorios y vulnera sus derechos humanos.

Uno de los objetivos de este estudio es visibilizar el trabajo de cuidados como un trabajo que debe ser remunerado. Sin embargo, en la realidad social, resulta imperativo pensar en la implementación de un programa de asistencia que pueda ayudar a las mujeres cuidadoras, que no reciben un salario, a poder acceder a fuentes económicas confiables y de inclusión, con ello se estaría avanzando en la igualdad de trato y oportunidades, así como garantizar que las mujeres vivan una vida libre de violencia y con goce pleno de sus derechos humanos.

[2] Pautassi, 2018.

En la región de América Latina y el Caribe, entre 1990 y 2013, la tasa de participación económica de las mujeres pasó del 40 % al 54 %; sin embargo, la progresiva incorporación de las mujeres a la actividad económico-laboral no ha tenido el esperado efecto de "puerta giratoria" que dé entrada a los hombres en la esfera doméstica y del cuidado.[3] La doble jornada laboral de las mujeres se traduce en menor tiempo para ellas, lo que acarrea consigo una limitante para el acceso a oportunidades y en ámbitos mayores, una dependencia económica de otra persona, quien en la mayoría de los casos es el varón.

Lo anterior lleva a revisar las acciones gubernamentales enfocadas en la asistencia para las mujeres cuidadoras que no tienen remuneración alguna por el trabajo que desempeñan, pues, a pesar de que los cuidados tienen importancia para el bienestar general, estos no siempre reciben el reconocimiento que merecen.

El ámbito de los cuidados abarca tres dimensiones: brindar cuidado, recibir cuidado y el autocuidado. Estas no son funciones excluyentes entre sí, ya que una misma persona puede desempeñar simultáneamente los tres roles a lo largo de su vida o incluso, en un mismo momento.[4] Pensar en el caso de una mujer de aproximadamente 45 años que inicia su jornada diaria a las 5:00 a.m. despertando a sus hijas o hijos y llevándoles a la escuela. Posteriormente, cumple con una jornada laboral formal de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. de lunes a viernes, y percibe por ello un salario considerablemente menor al de un varón que

[3] Sallé, 2018.

[4] López, 2022.

realiza las mismas funciones durante el mismo tiempo. Al regresar a casa, debe encargarse de las tareas domésticas, apoyar a sus hijas o hijos con las labores escolares, preparar la cena y los alimentos del día siguiente. Esa carga se ve agravada por el hecho de que la mujer padece insuficiencia renal, lo que le exige realizar diariamente un procedimiento de diálisis al anochecer, por lo que concluye su jornada alrededor de la medianoche y duerme apenas cinco horas antes de reiniciar el mismo ciclo. Aunque esa situación podría parecer extrema, representa la realidad cotidiana de muchas mujeres en México, quienes enfrentan una marcada desigualdad estructural y la persistente invisibilización del trabajo de cuidados que realizan.

Como las actividades de cuidados, generalmente, son realizadas por mujeres y niñas, comenzaron a ser tema de discusión, principalmente en cuanto a la inserción laboral femenina, pues las mujeres, para incorporarse al trabajo remunerado, necesitan delegar el cuidado de otras personas, principalmente el de sus hijas e hijos.[5] No obstante, las condiciones sociales y económicas que enfrentan muchas mujeres en México limitan significativamente esa posibilidad.

En cuanto al cuidado infantil, los costos de las estancias y guarderías privadas resultan prohibitivos para gran parte de la población. De acuerdo con el sondeo sobre los precios y características del servicio de guarderías privadas realizado por la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) en julio de 2019, el cuidado de un infante de entre 15 meses y 2 años puede oscilar entre $2,000.00

[5] López, 2022.

y $8,000.00 pesos mensuales. Ante esta situación, muchas mujeres optan por delegar el cuidado de sus hijas e hijos a familiares cercanos, como abuelas o tías. Además, es fundamental considerar otros aspectos relacionados con el trabajo de cuidados, como las condiciones laborales de las trabajadoras del hogar, la atención a personas adultas mayores y los derechos laborales de las mujeres en periodo de lactancia, entre otros.

La distribución desigual del trabajo no remunerado hace que las mujeres se vean obligadas a abandonar sus empleos remunerados, incluso en varios casos se prioriza el cuidar de la familia por encima de los logros profesionales, todo a causa de las obligaciones impuestas a las mujeres con las tareas de cuidado. El efecto del desequilibrio en la distribución y la organización social del cuidado en las mujeres varía; no obstante, según el escenario de empoderamiento, se dificulta la movilidad laboral ascendente de las mujeres afectadas, también, por los llamados techos de cristal.[6] La participación de las mujeres en empleos de tiempo completo, mejor remunerados o en cargos de dirección y toma de decisiones se ve limitada por la exigencia de una amplia disponibilidad horaria, lo cual resulta incompatible con las responsabilidades de cuidado que tradicionalmente se les asignan. Esta situación constituye un obstáculo para el pleno ejercicio de sus derechos laborales, ya que muchas mujeres se ven forzadas a aceptar empleos precarios y mal remunerados como consecuencia directa de su rol, socialmente impuesto, como principales cuidadoras.

[6] Sallé, 2018.

El artículo 11, numeral 2, inciso C, de la Convención para la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) explica que:

> Los Estados Partes tomarán medidas adecuadas para: alentar el suministro de los servicios sociales de apoyo necesarios para permitir que los padres combinen las obligaciones para con la familia, con las responsabilidades del trabajo y la participación en la vida pública, especialmente mediante el fomento de la creación y desarrollo de una red de servicios destinados al cuidado de los niños.[7]

Lo anterior se relaciona con lo que señalan los artículos 1° y 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM):

> Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia [...] La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia [...] Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud.

En ese contexto normativo se concluye que el Estado mexicano está obligado a garantizar la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, así como el derecho al cuidado a todas las personas (la disyuntiva es que ese derecho no esté positivizado en una norma general; sin

[7] Naciones Unidas, 2025.

embargo, de acuerdo con el control de convencionalidad de la norma jurídica, no debería ser necesario tener el derecho al cuidado forzosamente positivizado en una norma del derecho local para hacerlo exigible).

En el Estado de México viven 16.9 millones de personas, de las cuales 8.2 millones son hombres y 8.7 son mujeres.[8] Es importante resaltar que la demanda de cuidados por parte de personas en situación de dependencia va en ascenso, esto debido al proceso de envejecimiento de la población, que, además, comparado con las horas de trabajo remunerado y no remunerado que realizan hombres y mujeres, también hay muchas diferencias. Por ejemplo, de acuerdo con los datos que arroja el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2020, las mujeres mexiquenses realizan en promedio 24 horas a la semana de trabajo doméstico y de cuidados en los hogares no remunerados, mientras que los hombres solo nueve horas; esto significa que las mujeres dedican 15 horas más al trabajo de cuidados, además de realizar trabajo para el mercado, a diferencia de los hombres. La brecha por sexo observada es evidencia de cómo las mujeres son las principales encargadas de las tareas de cuidado y de que esta carga no disminuye a pesar de tener un trabajo remunerado.[9] Se concluye, entonces, que las políticas públicas encaminadas a la protección de las mujeres y a garantizar el ejercicio pleno de sus derechos y una vida libre de violencias deben ser primordiales para las agendas públicas.

8 INEGI, 2020.

9 IAPEM, 2022.

El Estado de México cuenta con instituciones y políticas encaminadas a la máxima protección de mujeres víctimas de violencia. Con fundamento en los artículos 52 y 53 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, es la Secretaría de las Mujeres la que procura acciones y políticas de gobierno en materias de perspectiva de género y derechos humanos; esta institución cuenta con sedes denominadas Ciudad Mujeres, que son espacios que brindan atención necesaria al sector femenil de la población mediante acciones y políticas de gobierno afirmativas, con el objetivo de brindar a mujeres, niñas y adolescentes en un mismo espacio atención integral.[10] Lo anterior se traduce en que la Secretaría de las Mujeres es la dependencia con competencia y atribuciones para que se garanticen los derechos de las mujeres.

Concluyendo, los cuidados deben ser entendidos como un derecho integral, no solo como una necesidad de asistencia. Este enfoque asegura que los cuidados no solo se limiten a la atención física, sino que abarquen también los aspectos emocionales, sociales y psicológicos, elementos fundamentales para el bienestar completo de las personas. Es necesario una inclusión mayor de los hombres en este trabajo. Comenzar a educar con principios de igualdad a las infancias será determinante para erradicar las brechas de género; es necesario enseñarles que el trabajo doméstico y de cuidados es tarea de todas las personas. El cambio en nuestras acciones y ver la realidad social con perspectiva de género ayudará a eliminar todos los tipos de violencia en contra de las mujeres.

[10] SEMUJERES, 2025.

La provisión de cuidados debe ser una responsabilidad compartida en la que el Estado asuma un papel central, garantizando mecanismos de asistencia que aseguren el ejercicio pleno de este derecho; sin embargo, dicha obligación no debe anteponerse a garantizar los derechos laborales de las mujeres, sino articularse de manera complementaria. En este sentido, la inversión en sistemas integrales de cuidado constituye una estrategia fundamental para promover el bienestar social, la inclusión y la igualdad sustantiva de oportunidades, independientemente de las condiciones físicas, mentales o sociales de las personas. En una sociedad justa e inclusiva los cuidados deben garantizar la dignidad y la autonomía de cada persona, promoviendo su participación y asegurando que todos los individuos puedan ejercer plenamente sus derechos humanos.

La implementación de un programa de asistencia como política pública, dirigida a las mujeres cuidadoras no remuneradas en el Estado de México, permitirá visibilizar el trabajo de cuidados, históricamente ignorado y menospreciado. Asimismo, contribuirá a garantizar el ejercicio del derecho al cuidado, promoverá la igualdad e inclusión en el ámbito laboral, y facilitará condiciones para el acceso a la independencia económica de las mujeres; además de que incidirá en la reducción de las brechas salariales y de género, sentando las bases para una transformación estructural en el reconocimiento y redistribución social del cuidado en la entidad mexiquense.

Comunicación eficaz: el gran desafío en la agenda pública de los derechos humanos

Mauricio Miguel Hernández Caballero*

Instituciones públicas y organizaciones civiles tienen grandes retos para lograr el reconocimiento, el respeto y la vigencia de los derechos humanos. Hoy, en la era de la información, uno de los más grandes desafíos se centra en lograr que la población conozca y defienda sus derechos a través de una comunicación eficaz, emanada desde las organizaciones que se dedican a esta noble labor, de ese reto versa el presente artículo.

En el ámbito de los derechos humanos, tema crucial en la agenda pública global y por supuesto de nuestro país y del Estado de México, el papel de la comunicación es

* Licenciado en Comunicación por la UAEMÉX, especialista en Derechos Humanos por la CNDH y estudiante de la Maestría en Derechos Humanos y Emergentes por la CODHEM. Jefe del Departamento de Relaciones Públicas y Monitoreo de la Unidad de Comunicación Social de la CODHEM.

vital, ya que el Estado no solamente debe proteger los derechos humanos, sino asegurarse de que su población los conozca, los entienda y pueda defenderlos. En palabras de Pedro Salazar Ugarte, existe la obligación constitucional de promover este concepto hacia la sensibilización social, al adoptar medidas tendentes a desarrollar una cultura basada en derechos humanos, incidiendo en la conciencia pública, "que sean vistos como un bien conocido y valorado".[1]

En otras palabras, indudablemente, promover los derechos humanos entre la población y lograr que incidan en su pensamiento y sus acciones, es un gran desafío para las instituciones públicas, los organismos defensores de los derechos humanos e incluso para las organizaciones civiles dedicadas a su protección, ya que más allá del compromiso formal de hacer eco en las personas sobre los derechos humanos y su importancia, como clave de la convivencia armónica, el reto reside no solo en comunicar, sino hacerlo de manera eficaz, ya que, de lo contrario, será muy difícil contrarrestar las ideas mal entendidas que se han arraigado en México a lo largo del tiempo, como veremos más adelante, y lograr que la gente haga suyos los derechos humanos.

Con todo ello, ¿será la comunicación eficaz un punto clave para asegurar que las y los habitantes de una sociedad comprendan la naturaleza de los derechos humanos y su importancia para la sana convivencia y el respeto de la vida, la integridad, la dignidad? ¿Será que hace falta tradu-

[1] Salazar Ugarte, Pedro, *La reforma constitucional sobre derechos humanos. Una guía conceptual*, 2014. https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3815/18.pdf

cir mediante una comunicación eficaz lo abstracto de las leyes, tratados y postulados de los derechos humanos, para hacerlos entendibles para la ciudadanía y con ello revertir las percepciones distorsionadas, parciales o inexactas que permean en nuestra cultura?

Como ejemplo de lo anterior, una encuesta realizada por el Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México (COP UVM, 2020), reveló que el 78 % de los encuestados considera que, en México, los derechos humanos son un obstáculo para la impartición de justicia; además, esta misma encuesta estableció que 83 % opinó que antes de proteger los derechos humanos de las víctimas, se protege más los derechos humanos del delincuente.

Habrá quien opine en favor y en contra de estas aseveraciones, que desde hace décadas se fueron enraizando en el inconsciente colectivo y que son, sin duda, un efecto de la comunicación: de "algo" que les dijo "alguien". Prueba de ello es que, en esta misma encuesta, al preguntar a las personas sobre a dónde deberían acudir en caso de sufrir alguna violación a sus derechos,[2] solo el 45 % dijo que a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; el 40 % afirmó que en México las instituciones públicas de derechos humanos funcionan mal, e incluso, el 14 % aseguró que no sabría a dónde acudir en caso de que violentaran sus derechos humanos.

El poder de la comunicación es grande, y como muestra de su influencia, basta recordar aquella campaña de fi-

[2] Centro de Opinión Pública COP Universidad del Valle de México, (2020). Derechos Humanos en México. Recuperado de Situación de los derechos humanos en México - Centro de Opinión Pública UVM el 27 de enero de 2025.

nales de los años noventa, donde Arturo Montiel —quien fuera gobernador del Estado de México de 1999 a 2005— dijo en un spot de propaganda política (*El Universal*, 2016) que "los derechos humanos son para los humanos y no para las ratas", haciendo alusión a quienes delinquen y son conocidos comúnmente con ese apodo. Al parecer, la frase fue creada por el publicista Carlos Alazraki como un eslogan para aumentar la popularidad del político mexiquense; pero, indudablemente, resulta contradictoria ante los pactos, convenciones, declaraciones y preceptos básicos de los derechos humanos y muy dañina para la percepción generalizada sobre estos, ya que incidió negativamente en la percepción de la población sobre el asunto, no solo en México sino —25 años después— en otros países como Perú, donde recientemente otro político dijo lo mismo.[3]

Ante ello, ¿podemos afirmar que la comunicación en el ámbito de los derechos humanos es un arma importante de persuasión? Por supuesto que sí. En esta esfera, como en todas las que tienen que ver con el quehacer humano, "el aire que respiramos es una mezcla de nitrógeno, oxígeno y publicidad", tal como lo decía a mediados del siglo pasado el publicista Robert Guérin, como planteamiento directo de la omnipresencia de la publicidad.[4]

---

[3] INFOBAE, (2024). Ministro peruano dice sobre los muertos en las protestas: "Los Derechos Humanos no son para las ratas". Recuperado de Ministro peruano dice sobre los muertos en las protestas: "Los Derechos Humanos no son para las ratas" - Infobae. El 26 de enero de 2024).

[4] Muñoz Santoja, José, "Contemos con la Publicidad", *Revista Comunicar*, Universidad de la Rioja, núm. 5, 1995. https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=323

¿Por qué no aprovechar ese potencial para promover una cultura distinta en la sociedad en favor de los derechos humanos, influir en su reconocimiento como conquistas sociales, cruciales, trascendentales, indispensables para la democracia y el desarrollo humano, vitales para evitar el abuso del poder que le puede ocurrir a cualquier persona y contrarrestar la misoginia, el racismo, el clasismo, el machismo, la homofobia y tantas formas de discriminación que han permeado en nuestra sociedad?

¿Por qué no plantearnos el desafío de incidir en el pensamiento y en el comportamiento de la población a través del conocimiento de los derechos humanos? Kofi Annan, quien fue secretario general de la ONU, lo decía claramente: "Los derechos humanos son sus derechos. Tómenlos. Defiéndanlos. Promuévanlos. Entiéndanlos e insistan en ellos. Nútranlos y enriquézcanlos. Son lo mejor de nosotros. Denles vida".[5]

Comunicar los derechos humanos a la población ha sido un reto a lo largo de la historia, desde Ciro El Grande, quien en el año 539 antes de Cristo creó "El Cilindro de Ciro", una pieza que, según la Organización de las Naciones Unidas,[6] es una antigua declaración de derechos humanos, que habría sido creada por el emperador de Persia para plasmar en este peculiar objeto cilíndrico lo que muy probablemente son los primeros esbozos por escrito de lo que hoy conocemos como derechos humanos.

---

[5] Kofi Annan: frases que mostraron su pensamiento ante los conflictos mundiales, *La Silla Rota*, 2018.

[6] Naciones Unidas, Obsequios de las Naciones Unidas. Réplica del "Edicto de Ciro", 2025. https://www.un.org/ungifts/es/r%C3%A9plica-del-edicto-de-ciro

En pleno siglo xxi, la pregunta sigue en el aire: ¿cómo hacer que la cultura de los derechos humanos, su respeto, su vigencia y su aceptación positiva entre la gente aumenten?

Dice al respecto la Plataforma Articulada para el Desarrollo Integral Territorial (2019) que la comunicación, desde el enfoque de derechos, se convierte en una herramienta participativa y empoderadora, que integra estrategias diferenciadas hacia los titulares de derechos, para que los conozcan y disfruten de los mismos, y los garantes de derechos para cumplir con sus obligaciones.

Así, las organizaciones e instituciones dedicadas a promover, estudiar o defender los derechos humanos no pueden quedarse a la zaga y deben dirigir sus esfuerzos para mantener el ritmo de una sociedad vertiginosa, que cambia rápidamente impulsada por las tecnologías de la información y la comunicación.

Por lo que toca a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, como organismo público defensor de la dignidad y las libertades de las personas, desde el ámbito de la comunicación, se busca aprovechar al máximo los canales de difusión disponibles a fin de coadyuvar a cumplir con el propósito constitucional de proteger, promover, respetar y garantizar los derechos humanos, a través de realizar una comunicación institucional eficaz, es decir, como lo plantea Rolando Rodrich Portugal:[7]

> contar con una función de gestión que ofrezca un marco para la coordinación efectiva de todas las comunicaciones

[7] *Fundamentos de la Comunicación Institucional: una aproximación histórica y conceptual de la profesión*, 2012. https://revistadecomunicacion.com/pdf/2012/Art212-234.pdf

> internas y externas con el propósito general de establecer y mantener una reputación favorable frente a los diferentes grupos de públicos de los que la organización depende. Esta comunicación incluye su imagen institucional y toda la comunicación que emitan al interior y exterior.

Ante ello, en los últimos años ha existido un aumento exponencial no solamente en el número de acciones de comunicación que se realizan para cumplir con los objetivos de la CODHEM, sino en la creación de productos de comunicación que aprovechen lo mejor de los métodos tradicionales y de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

Ejemplo de ello es que hasta mayo de 2025 la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México contabilizó más de 7000 menciones positivas en medios de comunicación, resultado de diferentes estrategias, fundamentalmente de la emisión de un promedio de 17 comunicados de prensa al mes, de la realización de entrevistas y las gestiones institucionales para procurar una mayor visibilidad del organismo ante la sociedad civil, con los medios de información y sus respectivas redes sociales como interlocutores. Esa cifra se proyecta que, al finalizar el año, sea el doble de lo que se alcanzaba en 2020, cuyo conteo final fueron poco menos de 7000 y más del triple de lo que se contabilizó en 2010, que resultó en poco menos de 3000 menciones positivas publicadas.

Con respecto a las redes sociales, estas han cambiado radicalmente el discurso audiovisual y demandan ciertos criterios creativos que son complejos de adaptar a la vida institucional. Aun con la falta de estandarización de

criterios y la existencia de muchas soluciones empíricas a los desafíos que presenta la comunicación en derechos humanos, la CODHEM se ha adaptado a las nuevas tendencias a partir de una sistematización detallada de la gestión de redes sociales, que incluye por primera vez la creación de un Manual de Procedimientos y un Protocolo para la atención de mensajes de la comunidad usuaria, lo cual resulta de gran importancia porque expertos en redes sociales coinciden en señalar que es trascendente responder los comentarios para generar mayor comunidad e interacción, pero más que eso, sirve para darle a las personas usuarias una herramienta más de contacto directo y atención inmediata.

Las redes sociales de la CODHEM han crecido de una manera importante: en 2009 ni siquiera se contaba con estos instrumentos (las primeras cuentas comenzaron en 2014 y emitían menos de 20 mensajes al mes), ahora se cuenta con Facebook, x, Instagram, Tik Tok, YouTube, Spotify y Threads, donde en 2024 se emitieron más de 4000 mensajes, cifra que aumenta cada día debido a la alta demanda de servicios de comunicación de las diferentes áreas de la CODHEM, al igual que el aumento de las propias campañas institucionales que ameritan ser difundidas públicamente.

También existe el reto de consolidar un lenguaje común para emisores y receptores de la comunicación en derechos humanos. Para hacerlo cada vez más entendible y accesible, en la CODHEM se ha impulsado ampliamente la sistematización y profesionalización de todas sus estrategias de comunicación, al agregar en todos sus mensajes el lenguaje inclusivo y la sencillez como componente

fundamental; se han reorientado los contenidos para ser más periodísticos y se han desarrollado productos nuevos como pódcast para mantener al organismo a la vanguardia en su búsqueda de posicionamiento entre la sociedad, además de estrategias de diseño con más dinamismo, mejor uso de colores y elementos gráficos, así como la construcción de mensajes más focalizados.

Hoy la CODHEM cuenta con un Estudio de Producción Audiovisual, construido *ex profeso* para la realización de actividades de comunicación, en el cual se cuenta con equipo profesional de audio, video, fotografía, cómputo e iluminación, y con el cual es posible realizar entrevistas, cápsulas, videos, enlaces en vivo a cualquier lugar del mundo, programas de radio, pódcast en audio y video y transmisión de eventos en tiempo real, dentro de una estrategia que comenzó a plantearse en 2014, cuando se adquirieron las primeras cámaras para las primeras producciones, mismas que, no serían posibles si no se contara con personal especializado.

En una entidad federativa del tamaño y diversidad del Estado de México, los retos son muy grandes. Aún existe una baja interacción con el público usuario de las redes sociales, tomando en cuenta que hay 18 millones de habitantes en territorio mexiquense, y solo se cuenta con poco más de 15,000 seguidores en Facebook (por citar un ejemplo). Ha sido necesario implementar imaginación, profesionalismo y, sobre todo, una gran dedicación a la noble tarea de difundir el mensaje de paz y respeto a los derechos humanos entre la población.

Cada día se trabaja con todos los recursos disponibles, se aprende algo nuevo, se producen más y mejores

contenidos con un lenguaje claro, conciso, directo, menos formal, más periodístico, y, con ello, se contribuye a que la gente también haga suyos los derechos humanos hablando de temas que son parte de la vida cotidiana desde el *bullying*, el respeto a la diversidad sexual, la no discriminación o la violencia de género, hasta el derecho a una buena administración pública, entre muchos otros.

Si los derechos humanos tienen su fundamento en la dignidad, la comunicación muy probablemente lo tiene en la eficacia, en la posibilidad de tender puentes de mutuo entendimiento entre emisores y receptores y muy en orden con las nuevas tecnologías de la comunicación, facilitar una interacción sana, dejar de lado el lenguaje técnico o excesivamente jurídico y hablar a las personas con las palabras más simples que sea posible.

En los productos de comunicación que se emiten cada día por parte del organismo defensor de los derechos humanos del Estado de México se busca que cada imagen, cada sonido y cada palabra reflejen la nobleza, transparencia, pluralidad, la buena fe y la solvencia moral de un organismo autónomo cuya misión es acercar a las personas al conocimiento de sus derechos y facilitar los medios para su defensa, para lo cual, la comunicación eficaz es una herramienta fundamental.

Análisis normativo en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, y las obligaciones del Estado mexicano

Yasmin Iglesias García*

Dentro de la presente investigación se realiza un breve estudio de la normatividad internacional, nacional y local, respecto de las obligaciones que tiene el Estado mexicano con las infancias y adolescencias, y cómo estas obligaciones deben marcar una injerencia en todos sus programas y políticas publicas en los diferentes órdenes de gobierno.

El cumplimiento efectivo de los derechos de niñas, niños y adolescentes es un elemento fundamental para lograr su desarrollo integral, de igual forma para impulsar la evolución de la sociedad mexicana, hacia una donde se garantice un clima de civilidad, paz, comprensión, respeto y bienestar hacia este sector.[1] Un claro ejemplo de ello

* Licenciada en Derecho y especialista en Derechos Humanos. Profesional con más de 14 años de experiencia laboral y destacada ponente en materia de Derechos Humanos.

1 CNDH, *Análisis situacional de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes*, 2022. https://informe.cndh.org.mx/menu.aspx?id=50071

lo encontramos en la creación del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, el cual tiene dentro de sus principales atribuciones el generar una nueva forma de realizar política pública a favor de las infancias y adolescencias en nuestro país, a través de la escucha activa de niñas, niños y adolescentes, así como la comisiones o grupos de trabajo creados por el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA). No obstante, aun cuando en nuestro país existen diversas normatividades para poder garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes, estas resultan ineficaces o no aplicadas en la vida cotidiana, pues normalizamos tanto la violación a sus derechos que incluso desestimamos estas leyes y normas aun cuando su aplicabilidad sea obligatoria.

Ahora bien, como se ha abordado en la presente investigación, el sector de estudio y en el cual se enfoca este trabajo son niñas, niños y adolescentes, y cómo sus derechos siguen vulnerándose, aun cuando existen diversas leyes, y normas que obligan al Estado y la sociedad a protegerlos.

De esta forma es importante conceptualizar quiénes son niñas, niños y adolescentes. De acuerdo con la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (2024), "Son niñas y niños los menores de doce años, y adolescentes las personas de entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad", es decir, cualquier persona entre los 0 y 12 años será considerada como niña o niño, y como adolescente cualquier persona entre 12 y 18 años. Este sector de la población, en el cual se centra la investigación, es reconocido como un grupo en situación de vulnerabilidad. Esto queda reforzado con la Declara-

ción de los Derechos del Niño, la que consideraba que la niñez, por su falta de madurez física y mental, necesitaba protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento.

Al respecto, la Secretaría General del Consejo Nacional de Población (SGCONAPO) estimó que en 2024 residían alrededor de 132.3 millones de habitantes en el país, de los cuales niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años representan el 29.4%, y se distribuyen en 49.1% de mujeres y 50.9% de hombres (SG CONAPO, 2023). Lo cual implica que del total de la población el 29.4% se encuentra en riesgo de sufrir una vulneración a sus derechos, de esta forma es importante conocer qué es la vulnerabilidad.

Dicho lo anterior, es definida por la Real Academia de la Lengua Española (2024) como vulnerable (del latín *vulnerabĭlis*) a quien "puede ser herido o recibir lesión, física o moralmente". Así, siempre que una persona se encuentre en una condición en virtud de la cual pueda sufrir algún tipo de daño, ya sea físico o moral, está bajo una situación de vulnerabilidad. Por tanto, la vulnerabilidad es un estado de riesgo al que se encuentran sujetas algunas personas en determinado momento; esta vulnerabilidad en algunas ocasiones hace que las personas se encuentren en un estado de opresión frente al resto de la sociedad, y con ello provocan discriminación frente a estos grupos de personas, ya sea por su edad, condición de salud, color de piel, estrato social, entre otros.

En otras palabras, "la vulnerabilidad es la condición de ciertas personas o grupos por la cual se encuentran en

riesgo de sufrir violaciones a sus derechos humanos".[2] Cuando dicha vulnerabilidad o estado de mayor riesgo se presenta debido a condiciones o características individuales o de aspectos esenciales de una persona, como la edad, el género, la condición física, la situación económica, estamos ante la presencia de la discriminación.

Para continuar, los grupos vulnerables son todos aquellos que, ya sea por su edad, raza, sexo, condición económica, características físicas, circunstancia cultural o política, se encuentran en mayor riesgo de que sus derechos sean violentados (CNDH, 2024). Quien pertenece a un grupo vulnerable es aquel que, por alguna característica, como la edad, la raza, sexo, se encuentra en mayor riesgo de que sus derechos humanos sean violados. Por ello, cuando hablamos de infancias y adolescencias, sabemos que estamos frente a un grupo de personas que, por razón de su edad, se encuentran en mayor riesgo de que sean violentados sus derechos, pues recordemos que son personas que todavía no han alcanzado un nivel de madurez física y psicológica.

A nivel internacional no siempre ha existido una necesidad de brindar protección a niñas, niños y adolescentes, esta necesidad surge y se materializa con la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño y en la Declaración de los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General el 20 de noviembre de 1959, y reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos, estas declaraciones internacionales expresaban la necesidad de

[2] Lara Espinoza, D., *Grupos en situación de vulnerabilidad*, Colección de textos en Derechos Humanos, CNDH, 2015, p. 24. http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/fas_ctdh_gruposvulnerabilidad1areimpr.pdf

proporcionar a la niñez una protección especial como se observa en la Declaración de los Derechos del Niño, refiriendo que "[...]niñas, niños y adolescentes por su falta de madurez, física, y psicológica necesitan especial protección y cuidado, incluso protección legal, tanto antes como después del nacimiento[...]".[3] De esta forma, a nivel internacional se estableció el antecedente del reconocimiento de infancias y adolescencias como sujetas de derechos, y ambas declaraciones dieron pie a otro documento vinculatorio para los estados miembros de la Organización de la Naciones Unidas.

Así pues, bajo un trabajo de 10 años, con las aportaciones de representantes de diversas sociedades, culturas y religiones, la Convención de los Derechos del Niño fue aprobada como tratado internacional de derechos humanos el 20 de noviembre de 1989. La Convención sobre los Derechos del Niño es por excelencia la primera normatividad internacional que reconoce los derechos de la niñez, y a su vez obliga a los Estados parte a reconocer estos derechos y garantizarlos.

De manera que esta Convención, a lo largo de sus 54 artículos, reconoce que la niñez (seres humanos menores de 18 años) son todos aquellos individuos con derecho de pleno desarrollo físico, mental y social, y con derecho a expresar libremente sus opiniones.[4] Además, la Convención es también un modelo para la salud, la educación, la supervivencia y el progreso de toda la sociedad humana.

---

[3] UNICEF, Convención sobre los Derechos del Niño, 2006, p. 9. https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf

[4] *Idem*.

Este instrumento jurídico internacional obliga a los Estados parte a proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes ante las distintas problemáticas a las que se enfrentan en diversos ámbitos de su vida, en este documento se reconoce a la niñez como sujetos plenos de derechos, y se establece la obligación de todas las instituciones públicas y privadas de implementar las medidas y acciones necesarias que garanticen su protección contra toda forma de discriminación.

La Convención sobre los Derechos del Niño ha sido un documento en todo el mundo para promover y proteger los derechos de las infancias, desde su aprobación a nivel global, se han producido avances considerables en el cumplimiento de los derechos de la infancia.[5] Un claro ejemplo de ello es el derecho a la supervivencia, la salud y la educación, a través de la prestación de servicios básicos que brindan los Estados. Otro ejemplo, es el reconocimiento, cada vez mayor, por parte de los Estados firmantes, en la necesidad de establecer un entorno protector que defienda a infancias y adolescencias de la explotación, los malos tratos y la violencia.

En ese sentido, en 2002 entraron en vigor dos protocolos facultativos, el primero relativo a la venta de niñas, niños y adolescentes; la prostitución infantil y la utilización de niñas, niños y adolescentes en la pornografía, y el segundo protocolo relativo a la participación de la niñez en conflictos armados.[6] Queda clara la intensión, incluso

[5] UNICEF, Convención sobre los Derechos del Niño, 2006. https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf

[6] *Idem*.

la voluntad política por parte de los Estados firmantes, de hacer cambios significativos tanto administrativos como normativos en materia de niñas, niños y adolescentes, dentro de sus países. Aun cuando a nivel global, la protección de los derechos de las infancias ha tenido un avance significativo, todavía falta mucho por hacer, los países han avanzado de forma desigual, algunos países siguen sin reconocer los derechos de las infancias y en otras regiones, estos derechos están en peligro de retroceso, por causas como la pobreza, las guerras, los conflictos armados internos y la salud.

En ese sentido, el Estado mexicano ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990, sin embargo, fue hasta el año 2000 cuando se creó la primera ley en México que protege a niñas, niños y adolescentes. No obstante, durante estos años ocurrieron diversas reformas legislativas relacionadas con los derechos de la niñez. Dentro de estas reformas, se abordó la violencia intrafamiliar —ahora violencia familiar—, las adopciones, la tipificación de delitos cometidos contra niñas y niños, entre los principales cambios.

En virtud de lo cual, diversas organizaciones sociales involucradas en la promoción de los derechos de la niñez en México, legisladores, así como el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, enfatizaron la necesidad de crear leyes especializadas en los tres órdenes de gobierno (Red por los Derechos de la Infancia, 2025). El objetivo era claro, dar cuenta en materia de los derechos de la infancia y crear medidas apropiadas para garantizar su cumplimiento. Sin embargo, estas reformas no superaban la protección y garantía que exige la Convención descrita.

En consecuencia, en diciembre de 1999 el Congreso de la Unión aprobó la reforma y adición al artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (2025), que introduce la noción de los derechos de niñas y niños, como: de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, y señala obligaciones básicas de la familia, la sociedad y el Estado para protegerlos. Con ello, el compromiso del Estado mexicano se convirtió en una realidad frente a los derechos de la niñez, la finalidad de constitucionalizar los derechos de este grupo vulnerable fue dar origen a instrumentos especializados para tal efecto.

De modo que el 29 de mayo de 2000 el legislativo aprobó la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, reglamentaria del artículo 4º constitucional, estos cambios a la Constitución federal y a la ley de referencia deben ser considerados como un paso fundamental en materia de protección de los derechos de la niñez, principalmente porque introducen por primera vez en la historia del país el concepto de niña, niño y adolescente, aspectos que resultan fundamentales para un trato diferente hacia esta población.

En consecuencia, con las reformas constitucionales a los artículos 4º y 73, fracción XXIX-P, en materia de derechos humanos de niñez y adolescencias, publicadas en octubre de 2011,[7] se adicionó el principio del interés superior de la niñez, se otorgó la facultad al Congreso de la Unión para expedir leyes en materia de derechos de niñas,

[7] CNDH, Derechos de las niñas, niños y adolescentes, 2025. https://www.cndh.org.mx/derechos-humanos/derechos-de-las-ninas-ninos-y-adolescentes

niños y adolescentes y se impulsó la promulgación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA). Por lo cual, el 4 de diciembre de 2014, se publicó en el *Diario Oficial de la Federación* la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Esta ley reconoce a niñas, niños y adolescentes como titulares y sujetos plenos de derechos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, en los términos establecidos en los artículos 1º y 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y busca garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de sus derechos humanos.

Es importante hacer mención que el principio del interés superior de la niñez, de acuerdo con Sergio Alejandro Rea Granados, investigador y académico mexicano especializado en derecho internacional y derechos de la infancia (2020), quien a su vez cita a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, establece que:

> la expresión "interés superior del niño"[...] implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño.

De esta forma, con la entrada en vigor de la Ley General en comento y de las leyes estatales en la materia, se marcó en nuestro país el inicio de una nueva etapa en la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia, pues no solo se reconoce como titulares de derechos a niñas, niños y adolescentes, sino que se establecen obli-

gaciones para el Estado, las personas encargadas de su cuidado y la sociedad en general.[8] De esta forma, la Ley General de los Derechos de las Niñas Niños y Adolescentes establece la creación del Sistema Nacional de Protección Integral (SIPINNA) como instancia encargada de establecer instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de la niñez y la adolescencia en nuestro país.

En conclusión, dentro del presente ensayo realizamos un análisis de normas, las cuales están obligadas a aplicar las autoridades cuando, dentro de sus trámites o procesos, programas e implementaciones de políticas públicas, se encuentren inmersos los derechos de niñas, niños y adolescentes. En nuestro país la incorporación del principio del interés superior de la niñez a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos representó un hito, pues, aun cuando existían diversas normas que proporcionaban cuidado y protección, de manera constitucional no existía un fundamento que le diera fuerza y respaldo a la Ley de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (2000). Con la incorporación de este principio a la Constitución, se dio pie a la creación de la Ley General de los Derechos de las niñas, niños y Adolescentes, estableciendo obligaciones para el Estado, la familia y sociedad. Los esfuerzos han sido contundentes, ello ha obligado a miles de autoridades a capacitarse y actualizarse en materia de derechos de infancias y adolescencias.

[8] CNDH, Derechos de las niñas, niños y adolescentes, 2025. https://www.cndh.org.mx/derechos-humanos/derechos-de-las-ninas-ninos-y-adolescentes

La inclusión de las personas con discapacidad física, auditiva y visual en la educación básica en el Estado de México

Ana Teresa Mejía Hernández*

Introducción

Las personas con discapacidad son un grupo en situación de vulnerabilidad cuyos derechos están en constante amenaza debido a que predominan prácticas de discriminación, rechazo y segregación. Esta situación deriva de prejuicios y estigmas, basados en visiones obsoletas de la discapacidad como una enfermedad que requiere ser curada o como un sufrimiento persistente e irreversible, que predominan en un contexto sociocultural de desconocimiento e indiferencia estructural.

* Licenciada en Relaciones Internacionales y especialista en Derechos Humanos. Actualmente es subdirectora de Formación en Derechos Humanos en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, alrededor de mil millones de personas en el mundo tienen discapacidad, lo que representa el 15 % de la población mundial, y en México, son más de seis millones de personas, lo que representa el 4.9 % de la población total. Sin embargo, existen diversos obstáculos que han impedido que las personas con discapacidad puedan satisfacer sus necesidades básicas y acceder a servicios públicos y privados, ya que no existen las condiciones estructurales y sociales idóneas para ello.[1]

Con base en la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) de 2017, 24 % de las mujeres y 25 % de los hombres, mayores de doce años con discapacidad, han sido sujetos de discriminación en México por lo menos alguna vez en su vida. Asimismo, 63.9 % de los hombres y 67.8 % de las mujeres, mayores de doce años con discapacidad, consideran que en el país existe un trato diferenciado y discriminatorio hacia las personas con discapacidad por parte de la sociedad mexicana.[2]

Asimismo, estos tratos diferenciados pueden observarse en las brechas educativas entre la población con discapacidad y la población sin discapacidad, por ejemplo, el Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) mostró que 20.4 % de la población con discapacidad de más de quince años estaba en condición de analfabetismo, mientras que solamente 3.7 % de la población sin discapacidad estaba

[1] Banco Mundial, La inclusión de la discapacidad, 14 de abril de 2022. https://www.bancomundial.org/es/topic/disability

[2] Instituto Nacional de las Mujeres, Discapacidad, 2021. http://estadistica-sig.inmujeres.gob.mx/formas/tarjetas/Discapacidad.pdf

dentro de la misma condición; este fenómeno se repite al analizar la asistencia escolar y la conclusión de la educación básica; la misma dinámica se replica en la asistencia escolar y en la tasa de eficiencia terminal de la educación básica.[3] Por lo anterior, resulta fundamental identificar las causas de esta brecha educativa con el fin de erradicarlas.

¿Qué es la discapacidad?

Para identificar las condiciones en las que viven las personas con discapacidad en México, es fundamental establecer algunos conceptos relevantes. En este sentido, con base en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPC), las personas con discapacidad son

> aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.

Sin embargo, este concepto fue evolucionando hasta convertirse en lo que es ahora. Antes y durante la Edad Media, predominó el modelo de prescindencia o de marginación, en el cual, la discapacidad se relacionaba directamente con un castigo divino para las familias, por lo que las personas con discapacidad eran escondidas, excluidas,

[3] Inegi, Clasificación de Tipo de Discapacidad – Histórica. https://www.inegi.org.mx/contenidos/clasificadoresycatalogos/doc/clasificacion_de_tipo_de_discapacidad.pdf

expulsadas de los pueblos o comunidades, e incluso, privadas de la vida, ya que la discapacidad se consideraba como algo negativo y que debía mantenerse oculto de la sociedad.[4]

A partir de la Revolución Francesa y hasta 1970, predominó el modelo asistencialista o rehabilitador en el que se consideraba que las personas con discapacidad tenían una enfermedad que debía ser curada para poder ser considerados como parte de la sociedad. Además, las personas con discapacidad no eran consideradas como sujetos de derecho, sino que debían estar bajo la tutela de una persona sin discapacidad o del propio Estado, por lo que no podían ejercer sus derechos de forma autónoma e independiente.[5]

Derivado de lo anterior, las políticas públicas y los esfuerzos nacionales e internacionales durante este periodo se enfocaban únicamente en la asistencia social para facilitar el acceso a las personas con discapacidad a terapias de rehabilitación, medicamentos y tratamientos médicos, así como a materiales de apoyo como prótesis, muletas, sillas de ruedas o bastones.

A partir de 1970, y a la fecha, ha predominado el modelo social, el cual reconoce que la discapacidad es objeto de barreras económicas, culturales y del entorno que representan obstáculos para el goce y ejercicio de los de-

[4] Organización Panamericana de la Salud, Discapacidad: lo que todos debemos saber, 2006. https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/719/9275316163.pdf?sequence=1

[5] Organización Panamericana de la Salud, Discapacidad: lo que todos debemos saber, 2006. https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/719/9275316163.pdf?sequence=1

rechos de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones. Es decir, reconoce la obligación de adaptar los entornos públicos no solamente en cuanto a la infraestructura, sino también de forma social, económica y política, identificando la urgencia de crear sociedades incluyentes.[6]

Es importante señalar que existen diversos tipos de discapacidad (física, auditiva, visual y mental o psicosocial) y que cada uno tiene características y necesidades específicas que se deben visibilizar y considerar para alcanzar una verdadera inclusión. Para efectos de delimitar el presente artículo, únicamente se hará énfasis en los primeros tres tipos de discapacidad, ya que estas discapacidades no representan barreras específicas al aprendizaje. Además, la discapacidad psicosocial no siempre es detectable y sus necesidades son sumamente heterogéneas, por lo que no es posible contar con cifras reales de las personas que tienen este tipo de discapacidad, ni establecer criterios únicos para atender sus necesidades específicas.

Marco normativo en materia de discapacidad

Existe un sólido marco normativo que busca proteger y garantizar los derechos de las personas con discapacidad a nivel internacional, nacional y local, que rige el actuar de las autoridades mexicanas y mexiquenses. El máximo

[6] Victoria, J. , "El modelo social de la discapacidad: una cuestión de derechos humanos", *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, nueva serie, año XLVI, núm. 138, septiembre-diciembre de 2013, pp. 1093-1109. https://www.scielo.org.mx/pdf/bmdc/v46n138/v46n138a8.pdf

documento a nivel internacional en materia de discapacidad es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad firmada en 2006, la cual establece que las personas con discapacidad deben gozar plenamente de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, sin discriminación alguna.

Además, señala la obligación de los Estados parte, dentro de los cuales se encuentra México, de establecer ajustes razonables en favor de las personas con discapacidad, es decir, que deben establecer los mecanismos de protección específicos necesarios para equilibrar las diferencias existentes entre las personas. En materia de educación, esta Convención establece que las personas con discapacidad tienen derecho a la educación sin discriminación y en igualdad de condiciones. Específicamente, el artículo 24 obliga a los Estados parte a crear un sistema de educación inclusivo en todos los niveles.

A nivel regional, en 2001 entró en vigor la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad (CIADDIS), la cual busca la prevención y eliminación de la discriminación, además de la plena integración de las personas con discapacidad a la sociedad. En cuanto a la educación, esta Convención establece la obligación de promover la integración de las personas con discapacidad en la prestación o suministro de bienes y servicios tales como la educación.

A nivel nacional, en 2011 se publicó la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que tiene como principal objetivo la inclusión de las personas con discapacidad a la sociedad. En esta ley se establece

que la educación especial es aquella que está únicamente dirigida a las personas con discapacidad mientras que la educación inclusiva es aquella que busca la integración de las personas con discapacidad en "los planteles de educación básica regular, mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos" que permitan que en una misma aula puedan tomar clases las personas con y sin discapacidad (Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad).

En 2021 se expidió la Ley para la Inclusión de las Personas en Situación de Discapacidad del Estado de México que, de manera similar a la ley federal, establece la diferencia entre la educación especial y la educación incluyente. Si bien la creación de las escuelas de educación especial es una medida que permite reducir la desigualdad en materia de acceso a la educación en el corto plazo, no es una solución orientada a erradicar la desigualdad que viven las personas con discapacidad de forma permanente ni se puede considerar como un mecanismo para la educación inclusiva. La educación especial perpetúa la exclusión de las personas con discapacidad, toda vez que las niñas y los niños con discapacidad no tienen la oportunidad de convivir con niñas y niños sin discapacidad y viceversa. Esto obstaculiza la creación de una conciencia social desde la niñez basada en la solidaridad, respeto y entendimiento.

Con base en lo anterior, se puede observar la importancia de que las personas con discapacidad tengan acceso a la educación para elevar sus estándares de vida, pero también como forma de interactuar con personas sin discapacidad y, con ello, facilitar su integración a la sociedad. Para ello, no se debe considerar únicamente la creación de

escuelas de educación especial, sino que se deben adaptar las escuelas conforme a los parámetros de la educación inclusiva.

Educación y discapacidad en el Estado de México

En 1993, con la emisión de la Ley General de Educación, se consideró por primera vez en la normativa la inclusión de las personas con discapacidad en las escuelas regulares. A partir de esto, se han desarrollado distintas estrategias y políticas de integración para las personas con discapacidad en el ámbito educativo, sin embargo, aún existe una gran brecha educativa.

Derivado de lo anterior, se crearon los Centros de Atención Múltiple (CAM), los cuales son servicios escolarizados de preescolar, primaria y secundaria especializados en la atención a personas con discapacidad, que buscan otorgar las herramientas necesarias para que estas personas sean autónomas e independientes. Asimismo, se crearon los Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER), que se componen por especialistas en educación especial que buscan la adaptación de las escuelas públicas de educación básica, a fin de facilitar la participación y el aprendizaje de las y los alumnos con discapacidad y, a la vez, fomentar su inclusión en el Sistema Educativo Nacional, sin discriminación.

Por otra parte, existen programas a nivel nacional enfocados en la educación inclusiva. En 2019 se creó el Programa Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE), cuyo objetivo es garantizar el acceso,

permanencia, participación y aprendizaje de todas las personas, con especial atención a las personas con discapacidad por medio de "un conjunto de acciones orientadas a eliminar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación que surgen de la interacción entre los estudiantes y sus contextos; las personas, las políticas, las instituciones, las culturas y las prácticas".[7]

En este programa se enfatiza la necesidad de la redistribución, reestructuración y cambios de la oferta educativa y de las organizaciones educativas del Sistema Educativo Nacional para que todas las personas, sin importar sus características o condiciones, puedan acceder a una educación de calidad, a través de un método de enseñanza diversificada adaptado a diferentes formas de aprendizaje. Adicionalmente, se crearon los Servicios de Educación Especial (SEE) para contribuir y reforzar las actividades destinadas a la creación de una educación inclusiva.[8]

Sin duda, este programa federal resulta fundamental para la creación de un sistema educativo inclusivo en el que se valore la diversidad, características, cualidades y necesidades particulares de todas las personas. Sin embargo, el Estado de México no cuenta con un programa similar enfocado en la creación de una educación inclusiva y, por ende, no cuenta con presupuesto destinado a este fin, lo que limita el margen de actuación de los CAM y las USAER.

---

[7] Secretaría de Educación Pública, *Diagnóstico. Programa Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial*, 2019, p. 15. http://www.dgadae.sep.gob.mx/EEPF/doc/Diagnosticos/2019/2019_Diag_S295.pdf

[8] Secretaría de Educación Pública. (2022). Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa. Sistema de Estadísticas Continuas. https://www.planeacion.sep.gob.mx/principalescifras/

A pesar de que desde 1993 se han impulsado diversos programas y servicios especiales en el país, las personas con discapacidad aún enfrentan importantes barreras en el acceso a la educación.[9] En el mismo año se registró que solamente el 66.6 % de las personas con discapacidad entre los 20 y los 24 años concluyó la educación primaria, por lo que no solo es importante garantizar el acceso a la educación para las personas con discapacidad, sino también proporcionar las herramientas necesarias para que concluyan dichos estudios.[10]

Aunado a lo anterior, de acuerdo con datos de la SEP de 2022, solamente el 29.3 % de las escuelas primarias cuentan con infraestructura adaptada para discapacidad en el Estado de México, mientras que únicamente el 14.8 % cuenta con los materiales necesarios, lo que demuestra que existe una clara escasez de oferta educativa inclusiva para que las niñas, niños y adolescentes mexiquenses con discapacidad puedan acceder a una educación de calidad.[11]

Educación inclusiva

El concepto de educación inclusiva se ha desarrollado en la última década y se refiere a crear el entorno propicio

[9] Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, Discapacidad y derecho a la educación en México, 2022. https://www.mejoredu.gob.mx/images/publicaciones/Discapacidad-de-2022.pdf

[10] *Idem*.

[11] Secretaría de Educación Pública. Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa. Sistema de Estadísticas Continuas, 2022. https://www.planeacion.sep.gob.mx/principalescifras/

para asegurar el aprendizaje de las niñas y los niños a fin de que participen plenamente en la sociedad, es decir, no se centra únicamente en los temas y materias a impartir sino en las condiciones de aprendizaje en las que se encuentra el alumnado.[12]

Para reducir la brecha educativa entre las personas con discapacidad y las personas sin discapacidad, no se debe impulsar la construcción de nuevas escuelas de educación especial sino adaptar las escuelas del Sistema Educativo Nacional con las herramientas necesarias para la inclusión de las personas con discapacidad, para que todas y todos puedan aprender dentro de las mismas aulas. Para ello, se requiere dotar de recursos económicos, materiales y humanos a las escuelas, destinados a la creación de programas, talleres y adquisición de los materiales necesarios.

En algunas ocasiones, solamente se necesitan modificar los tamaños, colores, volúmenes y velocidades de los materiales impresos o digitales para hacer más accesible la información. Sin embargo, en otros contextos es necesario implementar métodos digitales más avanzados como *software* que convierta el texto en voz o herramientas como apoyos visuales no lingüísticos, intérpretes de Lengua de Señas Mexicana (LSM) y textos en macrotipos, relieve o traducidos al Braille.[13]

---

[12] Comisión Nacional para la Mejora de la Educación. (2022). La USAER en voz de sus docentes. https://www.mejoredu.gob.mx/images/publicaciones/eval_diagnostica-usaer-primarias.pdf

[13] UNICEF, ¿Qué es el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA)? https://www.unicef.org/lac/dise%C3%B1o-universal-para-el-aprendizaje-y-libros-de-texto-digitales-accesibles

Por ello, a efecto de tutelar el derecho de las personas con discapacidad de acceder a educación de calidad, es necesario incluir el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) y de accesibilidad en cada uno de los programas y servicios educativos, utilizando las herramientas e instrumentos necesarios. Este sistema reconoce que las niñas y los niños tienen diversas formas de aprendizaje por lo que no es posible aplicar una única técnica de enseñanza en un aula de clases, para lo cual establece estándares mínimos que van desde infraestructura con dimensiones apropiadas, hasta medidas específicas orientadas a la inclusión social (UNICEF, 2022).[14]

Este sistema hace énfasis en las personas con discapacidad y busca facilitar su inclusión en la educación, al mismo tiempo que permite a las personas sin discapacidad alcanzar una mayor comprensión de los temas, ya que éstos se abordan de diversas maneras, dando mayor motivación y mejores resultados de aprendizaje para todas las personas.

En suma, es fundamental generar un espacio incluyente y abierto para todas las personas. Para ello, es necesario que, desde la primera infancia, niñas y niños tengan acercamiento a las necesidades de diferentes grupos y sectores de la población a fin de fomentar la solidaridad y la empatía, buscando normalizar la convivencia entre las personas con y sin discapacidad en todos los ámbitos de la vida, iniciando con la escuela.

[14] UNICEF, El acceso al entorno de aprendizaje I: entorno físico, información y comunicación, 2014. https://www.unicef.org/lac/media/35051/file/DUA-I.pdf

Conclusiones

Las personas con discapacidad se enfrentan a una discriminación estructural que impacta en todos los ámbitos de sus vidas. Existen múltiples normas jurídicas e instrumentos internacionales que tienen como objetivo eliminar esta discriminación y garantizar el goce pleno de los derechos de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones, sin embargo, la realidad aún se encuentra muy lejos de lo que establece el ordenamiento jurídico.

La educación es una herramienta que le permite a cualquier persona aspirar a mejores condiciones de vida y a desarrollarse plenamente en sociedad, de manera autónoma e independiente. Por ello, para que las personas con discapacidad puedan gozar plenamente de sus derechos, es necesario implementar medidas que les garanticen el acceso a la educación, sobre todo, en el nivel básico. La educación especial ha contribuido a la educación de las personas con discapacidad, no obstante, se trata de una medida segregacionista, que institucionaliza la discriminación. Para alcanzar una verdadera igualdad de condiciones entre las personas con discapacidad y las personas sin discapacidad, es fundamental crear una educación inclusiva en el país, que le permita a las personas con discapacidad estudiar en cualquier escuela del Sistema Nacional Educativo.

La principal barrera para la inclusión de las personas con discapacidad en la educación básica en el Estado de México es la inexistencia de una educación inclusiva, que se refleja en la falta de escuelas adaptadas para las distintas discapacidades (fuera de la educación especial); pero

también se reconocen como barreras importantes: la falta de recursos humanos, económicos y materiales, necesarios para hacer las escuelas accesibles para todas las personas; así como la falta de conciencia, solidaridad y empatía por parte de la sociedad.

La indiferencia y discriminación generalmente están basados en el desconocimiento y en la falta de interacción con personas de distintas condiciones, por lo que, al contar con una educación inclusiva desde una edad temprana, se desarrollarán las habilidades necesarias para comprender que los responsables de crear una sociedad inclusiva somos nosotros mismos.

Por ello, es fundamental crear una educación inclusiva, a través del Diseño Universal para el Aprendizaje, en la que se tome en cuenta las distintas formas de aprendizaje y se otorguen las herramientas necesarias para que todas las personas puedan tener acceso a la educación, sin discriminación. Asimismo, es fundamental que las escuelas de educación básica cuenten con el material y equipo necesario para atender las necesidades de las personas con discapacidad, a fin de que puedan integrarse en las mismas aulas que las personas sin discapacidad.

En el Estado de México aún queda un largo camino por recorrer para alcanzar la educación inclusiva, ya que no hay programas estatales que tengan como objetivo principal la transformación de la educación hacia una mayor inclusión, especialmente, de las personas con discapacidad.

Es urgente reducir la brecha educativa que existe, actualmente, a nivel básico entre las personas con discapacidad y las personas sin discapacidad en el Estado de México

para lograr la verdadera igualdad de condiciones en el ámbito educativo y, con ello, brindar mayores oportunidades para que las personas con discapacidad puedan acceder de manera formal a mejores condiciones en materia de salud, seguridad social y empleo, para que, finalmente, puedan gozar de una calidad de vida superior en ejercicio pleno de sus derechos humanos.

La gobernanza territorial y los procesos electorales: un análisis desde las autoridades auxiliares de los ayuntamientos del Estado de México

Anayeli Padilla Montes de Oca*

En este capítulo se hace un análisis de la importancia de las autoridades auxiliares municipales, como parte de la gobernanza territorial, así como los procesos electorales que se siguen para su integración, desde un enfoque del cumplimiento de los principios rectores de la función electoral. El presente estudio se centra en un análisis desde la gobernanza territorial sobre los procesos electorales de los ayuntamientos en el Estado de México, para proponer que las autoridades auxiliares puedan convertirse en un mecanismo de promoción y fortalecimiento de la participación ciudadana dentro de la elección popular de las y los representantes políticos.

* Adscrita al Instituto Electoral del Estado de México.

Los procesos electorales son un pilar de la participación ciudadana, la representatividad y la legitimidad del sistema político, aseguran la libre expresión de la voluntad popular, así como la rendición de cuentas de las personas servidoras públicas, por lo que el desinterés de la ciudadanía por participar en las elecciones, fenómeno social recurrente en los últimos años, es una problemática que ha provocado la necesidad de lograr un acercamiento territorial hacia la mínima célula social.

De esta forma, la gobernanza territorial ha surgido como una teoría que ha cobrado relevancia en el contexto actual y se refiere en palabras de Torre (2006) al:

> conjunto de los procesos y dispositivos por los cuales los integrantes o los actores de diferentes tipos (productivos, asociativos, particulares, representantes de los integrantes o de las colectividades locales[...]) contribuyen a la elaboración, tanto concertada como conflictiva, de proyectos comunes para el desarrollo futuro de los territorios.[1]

En lo político, la burocracia y la distribución de competencias de los distintos niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) se convierten en desafíos que a menudo dificultan la implementación de políticas públicas efectivas. La crisis de confianza en las instituciones públicas, generada por la percepción de ineficacia, corrupción o falta de transparencia, deslegitima la acción gubernamen-

[1] Torre, A., "El rol de la gobernanza territorial y de los conflictos de uso en los procesos de desarrollo de los territorios", *Rev. Geogr. Valpso*, núm. 53, 2016, p. 9. https://www.pucv.cl/uuaa/site/docs/20180316/20180316173008/53_1.pdf

tal. Asimismo, la creciente polarización social y política dificulta la construcción de consensos y la formulación de acuerdos que beneficien al conjunto de la ciudadanía. La resistencia a la participación ciudadana también limita la pertinencia y el impacto de las políticas públicas.

En este contexto, la gestión pública colaborativa emerge no como una opción, sino como una necesidad estratégica. Un enfoque colaborativo implica trascender los límites sectoriales y administrativos, fomentando la articulación de actores diversos: gobiernos en sus distintos niveles, sector privado, organizaciones de la sociedad civil, academia y, fundamentalmente, la ciudadanía. Solo a través de la construcción conjunta de agendas, la cocreación de soluciones y la corresponsabilidad en la implementación y evaluación de políticas es posible abordar la complejidad de estos desafíos. La colaboración permite maximizar recursos, diversificar perspectivas, generar soluciones más innovadoras y legítimas, y construir resiliencia social y territorial frente a las disrupciones. En esencia, es la vía para transitar de una gobernanza fragmentada a una gobernanza más integrada, efectiva y democrática.

Por medio de los procesos electorales la ciudadanía elige libremente, en condiciones de igualdad, a sus representantes, ejerciendo su derecho a la participación en la vida pública. Como menciona la ONU (2022):

> Actualmente se celebran más elecciones que nunca en todo el mundo. Sin embargo, esos procesos tienen lugar a veces en un contexto de deterioro de la democracia y de crecientes amenazas al espacio cívico.[2]

[2] Naciones Unidas, *Derechos humanos y elecciones. Manual sobre las Nor-*

La participación político-electoral asigna una serie de obligaciones para las autoridades de los Estados a fin de lograr procesos electorales auténticos que reflejen la decisión ciudadana, que van desde la creación de un marco legal robusto e imparcial, la garantía de la equidad en la contienda, la protección del voto, hasta la promoción de la participación ciudadana en estos procesos electivos. El cumplimiento estricto de estas obligaciones es lo que dota de legitimidad a los resultados electorales y el fortalecimiento de la democracia.

Las instituciones federales mexicanas han autorizado a los gobiernos municipales realizar procesos electorales novedosos para promover la participación de los grupos en condición de vulnerabilidad.[3] En el Estado de México, conforme a su Ley Orgánica Municipal, la división territorial de los municipios se integra por la cabecera municipal, y por las delegaciones, subdelegaciones, colonias, sectores y manzanas, con la denominación, extensión y límites que establezcan los ayuntamientos.

En este sentido, algunos ayuntamientos con presencia de comunidades indígenas en su territorio han establecido su propia normativa en cuanto a la elección de sus autoridades auxiliares.

---

mas Internacionales de Derechos Humanos en materia de Elecciones, Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, 2022, p. 1. https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-05/Human-Rights-and-Elections_ES.pdf

[3] Benton, A., "El efecto de las reglas electorales sobre el comportamiento de la votación indígena en el estado mexicano de Oaxaca", *Política y Gobierno*, vol. 16, núm. 1, 2009, pp. 37-69. https://www.scielo.org.mx/pdf/pyg/v16n1/v16n1a2.pdf

Las autoridades referidas pueden ser las y los delegados y subdelegados, para quienes existe un proceso electoral, como lo marca el artículo 59 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México:

> La elección de las personas titulares de las Delegaciones y Subdelegaciones será mediante voto libre, secreto y directo de las personas vecinas de la localidad y se sujetará al procedimiento establecido en la convocatoria que al efecto expida el Ayuntamiento, misma que deberá establecer la obligación de que las candidaturas sean ocupadas paritariamente.[4]

Las atribuciones de las y los delegados y subdelegados, son mantener el orden, la tranquilidad, la paz social, la seguridad y la protección de las personas vecinas; vigilar las disposiciones reglamentarias y reportar a la dependencia administrativa correspondiente las violaciones a estas; coadyuvar en la elaboración y la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal y de los programas que de este se deriven; informar sobre la administración de recursos que tenga encomendados; elaborar programas de trabajo; informar sobre desperfectos para realizar acciones correctivas, así como tener opinión motivada no vinculante respecto a que se autorice la instalación de nuevos establecimientos comerciales, las licencias de construcción y cambios de uso de suelo en sus comunidades.

En lo que respecta a las y los jefes de sector o sección y de manzana, dentro de sus funciones se encuentran co-

[4] Ley Orgánica Municipal del Estado de México. Publicada en el Periódico Oficial *Gaceta del Gobierno* del 2 de marzo de 1993. Última reforma 24 de mayo de 2024, p. 30.

laborar para mantener el orden, la seguridad y la tranquilidad de los vecinos del lugar, reportando ante los cuerpos de seguridad pública o jueces cívicos las conductas que requieran de su intervención; elaborar y mantener actualizado el censo de vecinos de la demarcación correspondiente; informar al delegado las deficiencias que presenten los servicios públicos municipales; participar en la preservación y restauración del medio ambiente, así como en la protección civil de los vecinos. Estos son nombrados por designio de los ayuntamientos como lo marca el artículo 61 de la ley referida: "Las jefaturas de sector o de sección y de manzana serán nombradas por el ayuntamiento, el cual deberá observar para su designación los principios de igualdad y equidad, garantizando la paridad de género".[5]

Las autoridades auxiliares, además de ser el primer contacto de la ciudadanía con la democracia, son también el referente del ejercicio de la función pública, pues a través de ellas los ayuntamientos ponen en marcha actividades que atienden las necesidades de la población; de la misma forma, pueden funcionar a la inversa, es decir, se convierten en portavoces de la ciudadanía.

Uno de los postulados de la gobernanza territorial es la inclusión de la comunidad en las políticas públicas, considerando la identidad cultural como uno de los factores fundamentales para ello,[6] y son precisamente los procesos de elección de autoridades auxiliares de los Ayuntamientos, el medio propicio para incluir a la comunidad en la

[5] *Ibidem*, p. 31.

[6] Miquel, M., "Análisis comparado de las elecciones de autoridades auxiliares en México", *Estudios Políticos*, núm. 60, 2023, pp. 157-174. https://doi.org/10.22201/fcpys.24484903e.2023.60.8687586875

toma de decisiones, pues constituye el ejercicio democrático más cercano al que acuden de manera genuina, pues se reconocen como integrantes de un mismo grupo social, ya que de forma natural existe un lazo cercano con las personas candidatas por ser parte de su propia comunidad, incluso se trata de personas que habitan las casas de los alrededores con quienes conviven día a día.

La teoría de la gobernanza territorial propone atender la necesidad de la Administración pública por interactuar de frente y con apoyo de la ciudadanía. Si bien el municipio es la base de la organización social, existen estratos aún más compactos dentro de un espacio geográfico determinado, integrado por personas que sufren de primera mano las carencias que se presentan en sus comunidades, incluso en ocasiones son pertenecientes a los grupos en situación de vulnerabilidad, quienes comparten lazos derivados del espacio sociocultural en el que se desenvuelven.[7]

Dado lo anterior, si las personas titulares de las jefaturas de sector, de sección y de manzana deben colaborar para mantener el orden, la seguridad y la tranquilidad de los vecinos del lugar, reportando ante los cuerpos de seguridad pública, las personas jueces cívicos las conductas que requieran de su intervención, elaborar y mantener actualizado el censo de vecinos de la demarcación correspondiente, informar sobre las deficiencias que presenten los servicios públicos municipales, así como participar en la preservación y restauración del medio ambiente, en cuan-

[7] Treviño, J., "Gobernanza en la administración pública". *Revisión teórica y propuesta conceptual. Contaduría y Administración*, núm. 233, 2011. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0186-10422011000100008

to a la protección civil de los vecinos, no cabe duda que su función cumple con los postulados de la teoría de la gobernanza territorial.

Los objetivos generales de la gobernanza territorial son, entonces, fomentar la transparencia y la equidad en la gestión de los recursos, tener las herramientas idóneas para la resolución de conflictos que puedan surgir en el territorio, así como promover la reflexión acerca de la prospectiva para el desarrollo y la deliberación ciudadana en la apropiación de los escenarios en el futuro inmediato, aunado a ampliar la institucionalización de las políticas públicas al plano social con fines de garantizar que las acciones lleguen hasta la ciudadanía.[8]

Bajo estas consideraciones, las autoridades auxiliares son las propias operadoras de la gobernanza territorial, pues los intereses son compartidos, la cercanía con los miembros de estos espacios y el reconocimiento público de la calidad moral de quienes ocupan estos puestos motivan la participación ciudadana, generando así una posible experiencia que propicie su injerencia en asuntos públicos de otra índole a niveles superiores.

En ese sentido, la elaboración de procesos electorales para cada una de las autoridades auxiliares permite seleccionar personas líderes que surgen de la comunidad, lo que contribuye a fortalecer la legitimidad y la transparencia de las decisiones tomadas en ese ámbito. Al elegir a personas comprometidas con su comunidad y que pueden

[8] Comisión Económica para América Latina (CEPAL), Prospectiva para el desarrollo: aportes para una gobernanza territorial con mirada de futuro, 2023. https://www.cepal.org/es/publicaciones/68669-prospectiva-desarrollo-aportes-gobernanza-territorial-mirada-futuro

laborar junto con el municipio de manera justa, imparcial, con apego a las normativas establecidas, se garantizan la equidad y la legalidad del proceso, se coadyuva con los principios electorales, ejes fundamentales para la consolidación del sistema democrático que sirven como base para obtener resoluciones que garanticen la regularidad y estabilidad democrática.[9]

Para ello, será necesario modificar la ley, o bien, crear un reglamento de elecciones de autoridades auxiliares del Estado de México, con el cual se homologuen en toda la entidad los requisitos, las bases y los procedimientos para llevar a cabo las elecciones referidas. Asimismo, es necesaria una regulación general que evite sesgos que atiendan intereses particulares de las autoridades organizadoras y de partidos políticos y que premie los principios electorales.

Los principios de la función electoral sirven de cimiento para los procesos electorales democráticos. El principio de igualdad implica la generación de condiciones que permitan tanto a hombres como mujeres ejercer su derecho a elegir en las mismas condiciones, sin discriminación en razón de género; sin embargo, como es sabido, las mujeres han sido un grupo históricamente discriminado, el cual necesita contar con circunstancias particulares que le permitan alcanzar derechos que no han gozado plenamente.

La paridad de género ha sido señalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su jurisprudencia 6/2015/, la cual menciona que la paridad de género debe estar presente en la postulación de candidaturas para in-

[9] Rosales, C., "Principios rectores en materia electoral en Latinoamérica", *Revista IIDH*, núm. 49, 2009. https://www.corteidh.or.cr/tablas/r24583.pdf

tegrar órganos de representación popular federales, estatales y municipales. Esta acción está encaminada a generar de manera efectiva el acceso al ejercicio del poder público de ambos géneros, en auténticas condiciones de igualdad; este principio en México fue incorporado como una acción afirmativa y pasó a instaurarse como un principio constitucional.

Por otro lado, el principio de imparcialidad tiene como destinataria particular a la autoridad organizadora y jurisdiccional en materia electoral e implica que esta actúe y decida atendiendo exclusivamente a los méritos y las características propias del asunto en cuestión por encima de sus preferencias políticas, es decir, supeditando cualquier interés personal o partidario.[10]

El principio de independencia toma sentido cuando las juezas y los jueces o magistradas y magistrados no se encuentran sometidos a ninguna instancia jerárquica, política, administrativa, económica, burocrática o de cualquier orden, pues la esencia del ejercicio de su función es la libertad para actuar, sin tomar en cuenta ningún elemento que no sea la ley. La legalidad en materia electoral se refiere a una garantía formal para que tanto la ciudadanía como las autoridades electorales actúen en estricto apego a las disposiciones consignadas en la ley, de tal manera que no se emitan ni desplieguen conductas caprichosas o arbitrarias al margen del texto normativo.[11]

[10] *Idem*.

[11] Tesis de Jurisprudencia P/J 144/2005, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, t. XXII, 2005, p. 111. https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/176707

Tal es la razón de que, a las autoridades electorales, a los partidos políticos, a las candidaturas y a la ciudadanía se les solicite actuar conforme a lo establecido en la normativa electoral vigente. Las autoridades electorales deben actuar con objetividad tanto al aplicar las normas electorales como al resolver controversias generadas en el proceso electoral.[12]

El principio de máxima publicidad tiene su origen en el derecho a la información, el cual garantiza que las personas gobernadas tengan acceso a datos sobre la Administración pública, que se transparenten el uso de recursos públicos y el ejercicio de las funciones; se convierte en un mecanismo de control institucional que implica que toda la información en posesión de la autoridad, es pública.[13]

Esos principios buscan garantizar que las decisiones tomadas durante las elecciones se basen en el contenido de la norma y se eviten sesgos externos; son fundamentales para asegurar la confianza de la ciudadanía. Su aplicación contribuye a crear un ambiente de competencia justa y equitativa que motive la participación ciudadana.

Conclusiones

Los principios electorales garantizan el proceso electoral en cualquier sociedad democrática. La imparcialidad,

[12] Orozco, J., "Consideraciones sobre los principios y reglas en el derecho electoral mexicano", *Isonomía*, núm. 18, 2003. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405021820030001000006

[13] González, M., "Las obligaciones de los institutos electorales en materia de transparencia y acceso a la información gubernamental", *Revista Mexicana de Opinión Pública*, núm. 24, 2018. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2448491120180001000015

la paridad, la certeza, la objetividad y la participación de la ciudadanía son elementos esenciales que deben regir cualquier proceso electoral, sin importar los cargos o puestos de que se trate. Se mostró la importancia de salvaguardar los principios democráticos en cualquier proceso electoral, ya que, en este momento, las personas jefas de sector, de sección y de manzana de los ayuntamientos en el Estado de México no pueden participar en elecciones democráticas.

Es necesario que las autoridades que organizan elecciones, candidaturas y la ciudadanía, cuenten con reglas claras que respeten y promuevan la legalidad, la transparencia y la legitimidad de los procesos electorales de las autoridades auxiliares, y así, se contribuye a fortalecer la democracia y a consolidar la confianza en las instituciones. El cumplimiento de esos principios es una responsabilidad compartida y puede ser una realidad siguiendo la teoría propuesta desde la gobernanza territorial.

Si bien, las elecciones de autoridades auxiliares no se organizan por las autoridades electorales administrativas estatales, pueden convertirse en un medio de promoción y difusión de relevancia de los procesos electorales, ya que son capaces de motivar la participación ciudadana, ya sea como miembros del ayuntamiento o como parte activa en los multicitados procesos. Con la creación de un reglamento estatal se dará certeza a la elección y legitimidad a los resultados; se dejará en mejor lugar a las instituciones electorales, que son un referente de ese tipo de ejercicios democráticos y que, indirectamente se ven afectadas si hay un descontento generalizado por parte de la ciudadanía.

Importancia de la perspectiva de género en la investigación de violaciones a los derechos humanos por los organismos públicos de derechos humanos

Jessica Terán Aguilar*

La victimización secundaria tiene lugar cuando se genera un daño adicional a la víctima, por parte de las instituciones a las que acude para acceder a la justicia ante la comisión de un delito o la vulneración a sus derechos humanos; a fin de evitarla, es imperante que las personas servidoras públicas que laboran en las comisiones estatales de derechos humanos cuenten con protocolos de actuación con perspectiva de género.

* Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México; especialista en derechos humanos por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México; estudiante de la Maestría en Derechos Humanos y Emergentes por la CODHEM; visitadora adjunta de Igualdad de Género y No Discriminación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

Históricamente han existido personas en situación de vulnerabilidad que, por sus condiciones o vivencias, han sido violentadas en sus derechos humanos, por lo que se ha creado un amplio ordenamiento jurídico para proteger sus derechos y los de todas las personas en busca de la igualdad. Este artículo gira en torno a la interrogante ¿será necesaria la incorporación de la perspectiva de género en la investigación de violaciones a los derechos humanos? Para responder esta pregunta, es necesario conocer cómo es la atención que se brinda a las personas quejosas o agraviadas y cómo se lleva a cabo la investigación de oficio y de queja de violaciones a derechos humanos en las comisiones locales.

Al mencionar el concepto "perspectiva de género", de manera casi inmediata pensamos en las mujeres, sin embargo, de acuerdo con Marcela Lagarde y de los Ríos[1]

> Han sido los sujetos, sometidos a formas peculiares de explotación, opresión y marginación quienes, al recrear sus historias e identidades particulares, realizan la crítica a la modernidad y a su más valiosa promesa: el desarrollo.

Es decir, este concepto se debe emplear para visibilizar a las personas que han sido históricamente marginadas y vulneradas, a fin de que reciban un trato diferenciado que les permita tener acceso a oportunidades y hacer efectivos sus derechos, con el objetivo de alcanzar la igualdad de género; para lo cual en México contamos con un amplio

[1] *Género y feminismo, desarrollo humano y democracia*, México, Siglo xxi editores, 2018, p. 9.

marco jurídico, a nivel internacional, nacional y local de protección de sus derechos humanos.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas,[2] los derechos humanos son inherentes a todas las personas; entre estos derechos encontramos los más elementales como el derecho a la vida, así como aquellos que le dan sentido a la vida misma, como el derecho a la libertad, a la educación, al trabajo, a no estar sometido a esclavitud ni a torturas, o los que nos permiten tener la libertad de opinión y de expresión, por ello, los derechos humanos deben ser protegidos sin discriminación.

En México se reconocen los derechos humanos para todas las personas, a través del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (2019), en donde, además, se establece la obligación de todas las autoridades en sus respectivas competencias para proteger, promover, respetar y garantizar estos derechos. A fin de dar cumplimiento a lo anterior, se han creado mecanismos jurisdiccionales y no jurisdiccionales para su protección; entre los jurisdiccionales se encuentran la acción de inconstitucionalidad, el juicio de amparo, las controversias constitucionales, entre otros; mientras que en los no jurisdiccionales encontramos el juicio político, así como los procedimientos que se siguen ante instancias como las comisiones estatales de derechos humanos, entre otros.

Las mujeres son uno de los grupos en situación de vulnerabilidad, a quienes no siempre les fueron reconocidos sus derechos humanos y aun en la actualidad no se

[2] Organización de las Naciones Unidas, *Desafíos globales. Derechos Humanos*, 2025. https://www.un.org/es/global-issues/human-rights

visibilizan sus necesidades por las instituciones o procedimientos que han sido creados a la sombra del patriarcado. De acuerdo con Marcela Lagarde y de los Ríos:[3]

> La perspectiva de género, tiene como uno de sus fines contribuir a la construcción subjetiva y social de una nueva configuración a partir de la resignificación de la historia, la sociedad, la cultura y la política desde las mujeres y con las mujeres.

Es decir, observar las desigualdades que han afectado a las mujeres a lo largo de la historia, como consecuencia de no ser incluidas en ningún ámbito de la vida, pues todo fue creado bajo un enfoque androcéntrico y patriarcal que atendía a las necesidades del género masculino.

Por lo anterior, resulta importante observar cuándo estamos ante la presencia de las categorías sospechosas, también llamadas rubros prohibidos de discriminación, que, de acuerdo con Sánchez Cordero Dávila[4] "son criterios que deben estar bajo sospecha porque a ellos se asocia un cúmulo de significados sobre las funciones y los comportamientos de las personas, elementos que además normalizamos y naturalizamos". Estas categorías las encontramos de manera enunciativa, mas no limitativa, en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (2019), siendo las siguientes: origen

[3] Marcela Lagarde y De los Ríos, Género y feminismo, desarrollo humano y democracia. Siglo veintiuno editores, México, 2018, pg. 13

[4] Citado en Núñez, L. y Raphel de la Madrid, L., *Buenas prácticas en el juzgar: el género y los derechos humanos*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2018, p. 222.

étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Los procedimientos que se llevan a cabo bajo una perspectiva de género tienen presente esas categorías en un análisis permanente, para corroborar que son o no la causa de los agravios y para brindar una atención más adecuada a las víctimas.

Por su parte, Núñez y Raphel de la Madrid establecen que:

> Un estereotipo de género, en tanto que está culturalmente construido y confirmado, puede repetirse en nuestra acción y pensamiento incluso de manera inconsciente. Por eso es preciso un esfuerzo constante de identificación de éstos para evitar su reproducción discriminatoria.[5]

Si las conductas cargadas de estereotipos de género pueden realizarse de manera inconsciente, se resalta la necesidad de contar con una guía que permita a las personas servidoras públicas advertir cuando sus diligencias, o sus decisiones, pasan por alto conductas discriminatorias, y pueden causar victimización secundaria. Asimismo, las autoras observan la necesidad de que se incorpore la perspectiva de género por las personas juzgadoras para lograr un entorno más igualitario.

---

[5] Núñez, L. y Raphel de la Madrid, L., *Buenas prácticas en el juzgar: el género y los derechos humanos*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2018, p. 221.

Bajo esa necesidad, se publicó la primera edición del *Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género*[6] de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Dicho protocolo es de observancia obligatoria para todas las juezas y todos los jueces de todos los niveles; sin embargo, este no surgió de la voluntad del Estado, sino como consecuencia de un deber impuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), como una de las medidas de reparación en los casos González y otras, Fernández Ortega y otros, así como Rosendo Cantú y otra, los cuales tienen en común la violencia sistemática en contra de las mujeres en México. Ese protocolo es un gran referente en México, que incluye esta metodología de análisis para las juezas y los jueces, en los casos en los que el género es la piedra angular.

Para que los derechos humanos sean protegidos de manera efectiva, no solo en el ámbito jurisdiccional, sino también en el no jurisdiccional, es necesario incorporar procedimientos bajo un enfoque de género, que hagan visible la desigualdad, la vulnerabilidad y las necesidades de cada personas en los que las víctimas no sean sometidas a una doble victimización. Los procedimientos seguidos por las comisiones estatales de derechos humanos son procedimientos que en sus leyes disponen que deben ser sencillos, sin mayor formalidad. Esto es benéfico para las personas que acuden a esas instituciones para solicitar los servicios que brindan, como la asesoría jurídica, ser canali-

[6] Suprema Corte de Justicia de la Nación, Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, 2020. https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/sites/default/files/protocolos/archivos/2022-01/Protocolo%20para%20juzgar%20con%20perspectiva%20de%20genero_2022.pdf

zadas a otras instituciones o iniciar alguna queja por actos u omisiones de autoridades o personas servidoras públicas que vulneran sus derechos humanos; sin embargo, al ser sencillos, se han dejado de observar parámetros como los que se aplican en el ámbito jurisdiccional, como la obligatoriedad de observar un enfoque de perspectiva de género que atienda a parámetros internacionales, y que facilite a los operadores brindar una atención diferenciada y especializada.

Las atribuciones de las comisiones locales de derechos humanos se pueden establecer en dos pilares fundamentales: el primero, de carácter preventivo, a través de la promoción y divulgación de los derechos humanos; el segundo es la defensa de los derechos humanos que surge una vez que estos son violentados por actos u omisiones de naturaleza administrativa por parte de cualquier autoridad o persona servidora pública estatal o municipal, para lo cual se inicia la queja o investigación de oficio, según corresponda.

Las investigaciones en derechos humanos constituyen una de las funciones primordiales de las comisiones estatales, dicha tarea tiene como finalidad brindar acompañamiento a las personas para que reciban atención integral y dar solución a las problemáticas. En los casos que es procedente, se llevan a cabo los procedimientos de mediación y conciliación, se elaboran posibles acuerdos, fomentando el acceso a la justicia y la cultura de respeto a los derechos humanos, así como la prevención de violaciones, y en los casos en que se acredita la existencia de violaciones, se emite la recomendación a la autoridad responsable.

A pesar de los avances en materia de derechos humanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha emitido diversas recomendaciones a las comisiones estatales, en las que se señala la falta de perspectiva de género; ejemplo de ello es la Recomendación 47/2023 emitida a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua, en la que señaló como uno de sus puntos recomendatorios implementar un curso integral "relacionado con los derechos de acceso a la tutela no jurisdiccional de los derechos humanos, seguridad jurídica y legalidad en la integración de los expedientes de queja, bajo una perspectiva de género e interés superior de la niñez", dirigido a los visitadores. Otro ejemplo es la Recomendación 57/2018 (2018), emitida a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, en la que recomendó garantizar que las quejas en las que se concluya que pueden existir violaciones a los derechos humanos de las mujeres por violencia de género en su contra, y en particular, en aquellos casos que se lleven a cabo dentro del ámbito laboral, deberán llevarse bajo una perspectiva de género; y revisar la forma en que se están llevando a cabo los procedimientos de mediación donde se infiera violencia contra las mujeres, a fin de evitar que el proceso sea revictimizante.

De acuerdo con la Alta Comisionada Adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Kate Gilmore, es necesario incorporar la perspectiva de género en las investigaciones de violaciones a derechos humanos, pues señala que "toda investigación sobre abusos y violaciones de derechos humanos que no incluya la perspectiva de género como uno de sus criterios, corre el peligro de ser incompleta, en el mejor de los casos, o de estar pre-

juiciada, en el peor de ellos". Además, refiere que sin este análisis de género las determinaciones en las investigaciones pueden reproducir estereotipos que afectan a mujeres, niñas, adolescentes y a otros grupos prioritarios como la población LGBTTTIQ+, así como a los hombres.[7]

En conclusión, es necesario que las personas servidoras publicas cuenten con las herramientas necesarias para atender sus deberes en la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos, por lo que resulta necesario contar con un protocolo de actuación que incluya la perspectiva de género en los organismos públicos de derechos humanos; ya que si bien, la capacitación en esta materia es permanente, no ha bastado con conocer la teoría, pues es preciso contar con una guía que permita materializar lo aprendido en las capacitaciones, a través de un protocolo que contenga las preguntas que deben plantearse las personas visitadoras al momento de atender a las personas usuarias, y que les permita observar en todo el proceso de la investigación si las personas usuarias de los servicios que brindan las comisiones de derechos humanos corresponden a algún grupo en situación de vulnerabilidad, si existe violencia estructural o sistemática, asimetría de poderes, entre otros; lo cual fortalecería la atención que se brinda a las personas y favorecería la reivindicación de los derechos humanos promoviendo un entorno más igualitario e inclusivo.

[7] Organización de las Naciones Unidas, Incorporar la perspectiva de género a las investigaciones sobre derechos humanos, 2018, https://www.ohchr.org/es/stories/2018/10/gender-integration-human-rights-investigations

COMISIÓN DE
DERECHOS
HUMANOS
DEL ESTADO DE MÉXICO

ISBN: 978-607-5891-75-0